



Asamblea General

Sexagésimo noveno período de sesiones

33^a sesión plenaria

Jueves 30 de octubre de 2014, a las 10.00 horas

Nueva York

Documentos oficiales

Presidente: Sr. Kutesa (Uganda)

Se abre la sesión a las 10.25 horas.

Homenaje a la memoria del Presidente de la República de Zambia,

Excmo. Sr. Michael Chilufya Sata

El Presidente (*habla en inglés*): Antes de proceder a examinar los temas de nuestro programa, cumplo el triste deber de rendir homenaje a la memoria del Presidente de la República de Zambia, Excmo. Sr. Michael Chilufya Sata, quien falleció el martes, 28 de octubre de 2014.

En nombre de la Asamblea General, solicito a la representante de Zambia que transmita nuestras condolencias al Gobierno y al pueblo de Zambia y a la afligida familia del Excmo. Sr. Michael Chilufya Sata.

Invito a los representantes a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria del Presidente Sata.

Los miembros de la Asamblea General guardan un minuto de silencio.

El Presidente (*habla en inglés*): En lo personal, para mí fue muy triste recibir la noticia del deceso del Presidente Sata esta semana. A lo largo de los años, tuve el placer de trabajar con el Presidente Sata en muchas cuestiones de importancia mutua para nuestros dos países. Se destacó por ser un hombre amante de la paz, cuyos esfuerzos repercutieron no solo en el pueblo de Zambia y el continente africano, sino de hecho en el

mundo entero. Su ética de trabajo y su incansable dedicación al pueblo de Zambia se recordarán durante mucho tiempo, así como su trayectoria legendaria hacia el máximo cargo político en Zambia.

El Presidente Sata fue único, y lo extrañaremos mucho. Que su alma descanse en paz eterna.

Tiene la palabra la representante de Zambia.

Sra. Kasese-Bota (Zambia) (*habla en inglés*): Intervengo ante la Asamblea General en representación de una nación en duelo. El Presidente de la República de Zambia, Excmo. Sr. Michael Chilufya Sata, falleció en la noche del martes 28 de octubre 2014 en Londres, adonde había acudido para recibir atención médica. Su deceso tiene lugar apenas cuatro días después de que la nación rebosara de júbilo al celebrar el cincuentenario de su independencia.

Nacido en 1937 en el distrito de Mpika en el norte de Zambia, el extinto Presidente Sata fue el quinto Presidente de la República. Asumió el cargo en septiembre de 2011, tras ganar las elecciones presidenciales y destituir el Movimiento por la Democracia Multipartidaria, que había gobernado Zambia durante 20 años.

El Presidente Sata fue una figura prominente en la historia política de Zambia. Antes de sumarse a la política, trabajó en varias instituciones, como la Fuerza Policial, el Transporte de Londres, posteriormente como empresario y, finalmente, se convirtió en un político auténtico.

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y la traducción de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y deben enviarse con la firma de un miembro de la delegación interesada, incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina U-0506 (verbatimrecords@un.org). Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org>).

14-59633 (S)



Documento accesible

Se ruega reciclar



El fallecido Presidente comenzó su carrera política ocupando cargos de menor jerarquía, como concejal de distrito, elevándose gradualmente a la eminencia política con su elección como Presidente de la República en 2011.

La Asamblea recordará que en 1991 el Presidente Sata fue una de las voces prominentes que abandonó el Gobierno para sumarse al llamamiento para la reintroducción de la democracia multipartidista. Durante este despertar histórico de la nación, su sagacidad política fue un apoyo fundamental para la campaña nacional por la libertad política y el restablecimiento de otros derechos democráticos. Más tarde ocupó varios cargos, incluidos el de Ministro de Salud, Ministro de Gobierno Local, Ministro del Trabajo y Gobernador del Distrito de Lusaka, entre otros. Fue Ministro sin Cartera, su último cargo antes de fundar el Frente Patriótico, después de lo cual fue Secretario Nacional del partido gobernante. Ello lo hizo el tercer político con más experiencia en la jerarquía del Gobierno del difunto Presidente Frederick J. T. Chiluba.

Gracias a sus cualidades singulares, se le asignaron algunas de las carteras más difíciles, lo que más que desalentarlo, lo motivó a lograr un éxito sorprendente, que destacó aún más su posición política. El difunto Presidente Sata creyó en mejorar el bienestar de todos los zambianos, en particular de las mujeres y los niños, y su renombre nacional creció con el paso del tiempo. Fue un político de base en el verdadero sentido de la palabra. Su contribución a la paz y la tranquilidad continuadas de Zambia y su ayuda a consolidar la administración democrática del país no tienen paralelo. En dos ocasiones, cuando multitudes de sus partidarios querían salir a las calles después de las elecciones generales y presidenciales de 2006 y de 2008 para impugnar los resultados, llamó a la calma y moderación para bien de la unidad nacional, colocando el interés nacional por encima del propio.

El difunto Presidente Sata casi por sí solo dirigió su partido político, el Frente Patriótico. Sus comienzos fueron modestos y llegó a dominar el panorama político de Zambia. Se presentó a las elecciones presidenciales inmediatamente después de renunciar al Gobierno en 2001, a las elecciones subsiguientes de 2006 y a las elecciones parciales presidenciales de 2008, antes de marcar finalmente una victoria rotunda en las elecciones de 2011. Como era su costumbre, después de cada elección lanzaba de inmediato la próxima campaña electoral, empezando con una gira por las zonas rurales del país para agradecer a los que habían votado por él. Su voz en la oposición política fue entonces una constante y

eficaz amenaza para los Gobiernos en ejercicio. El Presidente Sata fue muy conocido por sus pocas palabras y su franqueza. También tenía sentido del humor y era generoso, y mostraba un grado de humildad y amabilidad que rara vez se encuentra en las personas con poder.

Zambia ha perdido un organizador político excelente que causó que sus opositores políticos pasaran noches en vela. Se le recordará con cariño como un hombre de acción y un Presidente que contribuyó al desarrollo económico de Zambia mediante inversiones masivas en la infraestructura y que abrió la interconectividad de Zambia de una manera sin precedentes en solo tres años de su Gobierno.

El difunto Presidente Michael Sata fue un partidario fundamental de las Naciones Unidas, puesto que su trabajo resonó con su propia pasión al servicio de sus semejantes. Sus discursos pronunciados en la serie de sesiones de alto nivel de la Asamblea General en sus sexagésimo séptimo, sexagésimo octavo y sexagésimo noveno períodos de sesiones pueden dar prueba de este hecho.

En nombre del Gobierno y el pueblo de la República de Zambia, deseo dar las gracias al Presidente de la Asamblea General y al Secretario General de las Naciones Unidas, gracias a quienes los Estados Miembros están presentes en esta conmemoración, y a toda la membresía de las Naciones Unidas, por sumarse al pueblo de Zambia en esta hora de su gran pérdida. Quiero asegurarle a todo el mundo que nuestra nación agradece mucho sus amables gestos.

Por lo tanto, quisiera concluir informando a la Asamblea de que el proceso de transición ya está en curso. De conformidad con las disposiciones de la Constitución de Zambia, el Vicepresidente de la República de Zambia, Sr. Guy Scott, está actuando como Presidente interino en espera de las elecciones parciales presidenciales, que deben celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la muerte del Presidente.

El Gobierno se siente gratificado de que el pueblo de Zambia siga mostrándose unido y lo está ahora más que nunca en el dolor, esperando ofrecer sus últimos respetos a su difunto Presidente en paz y dignidad. Dependemos de la solidaridad y los mejores deseos de nuestros amigos en la comunidad internacional para superar esta tragedia nacional.

Que el alma de nuestro querido difunto Presidente, Su Excelencia el Sr. Michael Chilufya Sata, descanse en la paz eterna.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante del Estado Plurinacional de Bolivia, quien hablará en nombre del Grupo de los 77 y China.

Sr. Llorenty Solíz (Estado Plurinacional de Bolivia) (*habla en inglés*): Tengo el honor de hablar en nombre del Grupo de los 77 y China para rendir homenaje al Presidente de la República de Zambia, Sr. Michael Sata, quien falleció el 28 de octubre de 2014 en el Hospital King Edward VII en Londres.

En nombre del Grupo de los 77 y China deseo expresar nuestra solidaridad a la República de Zambia y expresar nuestras sentidas condolencias por la muerte del Presidente Sata, quien se convirtió en el quinto Presidente de Zambia el 23 de septiembre de 2011 tras una votación popular. Sus logros y esfuerzos son una contribución importante al desarrollo y crecimiento de la República de Zambia. Además, el Grupo de los 77 y China seguirá apoyando las valiosas iniciativas de ese país.

Al pueblo de Zambia le decimos que sabemos que las palabras son un pobre consuelo pero queríamos expresar nuestro profundo pesar por la pérdida de un líder tan importante.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante de Malawi, quien hablará en nombre del Grupo de Estados de África.

Sr. Msosa (Malawi) (*habla en inglés*): El Grupo de Estados de África ofrece sus condolencias al Presidente Interino de la República de Zambia, Sr. Guy Scott, y al pueblo de Zambia por la pérdida de una de los líderes de más alto nivel de África, Su Excelencia el Sr. Michael Chilufya Sata, quien falleció el 28 de octubre de 2014 a la edad de 77 años en Londres.

Nos unimos al pueblo de Zambia en este triste momento para rendir homenaje a un dirigente que dedicó toda su vida a lo que era beneficioso para el pueblo de su país, el continente africano y todo el mundo. El Presidente Sata fue un hombre de gran valor y visión. Durante su campaña presidencial transmitió a su pueblo un mensaje de coexistencia pacífica para todos los zambianos. También luchó por el desarrollo socioeconómico de su país y se esforzó por impulsar la prosperidad de Zambia a su más alto nivel.

África recordará con cariño al Presidente Sata como un valiente luchador por la libertad, un reformador y uno de los arquitectos de la lucha por la liberación que llevó a la independencia de Zambia y otros países africanos. Sabemos que todos los que conocían personalmente u oficialmente al difunto Presidente Sata, lo echarán de

menos, por los ideales en los que creía con firmeza y por su valor al buscar que se respetara su pueblo y se atendieran las necesidades básicas que este merece.

En el Grupo de Estados de África todos lamentamos profundamente la pérdida de un verdadero hijo de Zambia y de África. Trabajó incansablemente por promover la paz y la estabilidad, no solo en su propio país, sino en todo el continente africano y en el resto del mundo.

En estos momentos de dolor, el Grupo de Estados de África desea exhortar a todos los zambianos a que permanezcan tranquilos, unidos y en paz.

Que su alma descanse en paz.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante del Japón, quien hablará en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico.

Sr. Yoshikawa (Japón) (*habla en inglés*): Tengo el gran honor de hablar en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico en esta solemne reunión de la Asamblea General para rendir homenaje a la memoria del difunto Presidente de la República de Zambia, Su Excelencia el Sr. Michael Chilufya Sata.

La historia recordará sin duda al difunto Presidente Sata como hombre de convicción y acción. A lo largo de su mandato, que comenzó en 2011, el fallecido Presidente trabajó con diligencia para mejorar la vida de los ciudadanos comunes. Su firme liderazgo contribuyó de manera profunda a la mejora de la sociedad de Zambia.

Aplicó políticas a favor de los pobres y para el desarrollo equitativo, y atrajo la atención hacia los desfavorecidos de la población de su nación. En particular, el difunto Presidente logró el suministro de servicios médicos gratuitos a su pueblo y creó 650 puestos adicionales en el sector de la salud en todo el país. En cuanto a la educación, promovió la construcción de instalaciones para las escuelas elementales y secundarias, duplicando así el número de edificios educativos en Zambia. Además, promovió con vigor el desarrollo de la infraestructura en las zonas rurales.

El difunto Presidente también subrayó la necesidad de lograr la justicia social. Estableció un comité contra la corrupción y aumentó el número de personal y el presupuesto para la oficina del Auditor General.

También fue un gran defensor de las Naciones Unidas. En su discurso ante la Asamblea General en septiembre de 2013, que tristemente ha resultado ser su última comparecencia en esta tribuna, declaró de manera solemne su fe en el multilateralismo y su determinación

de trabajar por la paz y el desarrollo internacionales a través de la Organización (véase A/68/PV.7).

Un ejemplo notable de su compromiso con las Naciones Unidas fue el activo papel de Zambia al afrontar una serie de desafíos que encaran los países en desarrollo sin litoral. La delegación de Zambia, en su calidad de Presidente del Grupo de países en desarrollo sin litoral, ha asumido el liderazgo en este ámbito. Su fallecimiento es sin duda una enorme pérdida para este órgano mundial.

A título nacional, quisiera abordar brevemente la relación privilegiada de que gozó el Japón con Zambia y su difunto Presidente.

Este año marca el quincuagésimo aniversario de la independencia de Zambia. El día de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio de 1964 fue el día en el que Rhodesia del Norte se convirtió en una Zambia independiente. Los atletas de la recién fundada Zambia marcharon con orgullo por la arena de Tokio, blandiendo su nueva bandera nacional. El pueblo japonés quedó muy impresionado con su marcha, que simbolizaba las grandes expectativas de un futuro brillante. Desde entonces nuestros dos países han cultivado relaciones fuertes y amistosas. Sus Altezas Imperiales el Príncipe y la Princesa Akishino del Japón visitaron Zambia el pasado julio para celebrar el quincuagésimo aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales.

El difunto Presidente Sata hizo contribuciones significativas para fortalecer nuestros lazos bilaterales. Mediante sus visitas al Japón, incluida su visita oficial en 2012 y su participación en la quinta Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África en 2013, profundizó personalmente los intercambios con nuestro pueblo.

Tuve el honor de conocer al Presidente Sata en enero de este año con motivo de la Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba. Por ello, fue con gran tristeza que me enteré del fallecimiento repentino del difunto Presidente.

El mundo ha perdido un gran político. En esta ocasión solemne, en mi calidad de Presidente del Grupo de Asia y el Pacífico en el mes de octubre, deseo transmitir mis más profundas condolencias a la familia del difunto Presidente y al Gobierno y pueblo de la República de Zambia. Creemos firmemente que el pueblo de Zambia tiene la fortaleza para superar esta tristeza y seguir trabajando para lograr mayor prosperidad.

Que su alma descanse en paz.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante de Estonia, quien hablará en nombre del Grupo de Estados de Europa Oriental.

Sr. Kolga (Estonia) (*habla en inglés*): Con gran pesar me enteré del fallecimiento del Presidente de la República de Zambia, Su Excelencia el Sr. Michael Chilufya Sata. En calidad de Presidente del Grupo de Estados de Europa Oriental, permítaseme expresar nuestras más profundas condolencias al pueblo de Zambia y a la familia del difunto Presidente Sata en respuesta a esta triste noticia.

Quisiera aprovechar esta ocasión para rendir homenaje al difunto Presidente, quien fue un miembro de la comunidad internacional muy respetado y un dirigente comprometido con el pueblo de Zambia. La historia recordará al Presidente Sata como un líder carismático que será considerado en su propia nación como un competidor apasionado, un auténtico zambiano y un hombre de convicción y gran determinación. Como lo han señalado sus amigos, era extremadamente dedicado a todo lo que quisiera lograr. A lo largo de su carrera política, desempeñó un importante papel en la vida pública de su país y fue siempre un defensor del pueblo de Zambia.

Que descanse en paz.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante de Granada, quien hablará en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe.

Sr. Antoine (Granada) (*habla en inglés*): En nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe y la Misión Permanente de Granada, transmito mis más profundas condolencias por el fallecimiento del Presidente Michael Chilufya Sata al Representante Permanente de Zambia y su personal, a la familia del difunto Presidente, al Gobierno y al pueblo de Zambia.

Los zambianos con los que he hablado me han dicho que el difunto Presidente era un hombre que mucho trabajó por su pueblo, su país y África incluso años antes de ser Presidente. En toda su vida política, y como Presidente, trabajó con pasión en favor de los pobres y marginados. El Presidente Sata siempre fue un hombre de acción. Fue policía, dirigente sindical, empleado de limpieza del ferrocarril, transportador de equipaje y Presidente. Fue un estudiante de larga data, que se graduó con un título solo en 2011. Sin embargo, a pesar de todo, nunca perdió el buen trato con todos o su pasión por mejorar la vida de su pueblo. Fue un modelo de determinación que los dirigentes políticos deberían emular.

Al celebrar su vida, cabe recordar la reforma del sistema nacional de atención de la salud que el fallecido Presidente llevó a cabo mientras desempeñaba su mandato como Ministro de Salud, logro que merece conocerse en vista de los problemas de atención de la salud que existen actualmente en África. En las palabras de un poeta,

“Ganarse el reconocimiento de los críticos más serios y soportar la traición de los falsos amigos; Apremiar la belleza, descubrir lo mejor en los demás; Mejorar el mundo, ya sea con un niño sano, un cantero en un jardín, una reivindicación social; Saber incluso que en la vida se ha respirado mejor porque se ha vivido. Esto es tener éxito”.

Michael Sata tuvo éxito. El fallecimiento del Jefe de Estado de Zambia, hombre valiente que murió mientras trataba de lograr el desarrollo sostenible en su país, nos entristece a todos.

Que su alma descanse en paz.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante de Suecia, quien hablará en nombre del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados.

Sr. Thöresson (Suecia) (*habla en inglés*): En esta muy solemne ocasión, tengo el honor de hablar en nombre del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados. Con profunda tristeza y gran pesar nos enteramos del fallecimiento del Presidente de la República de Zambia, el Excmo. Sr. Michael Chilufya Sata.

La semana pasada, el 24 de octubre, celebramos el quincuagésimo aniversario de Zambia. La historia recordará al Presidente Sata como un dirigente comprometido con la consolidación de su país en sus primeros 50 años de independencia. Reconocemos sus numerosos logros y su deseo de lograr el desarrollo político y económico de Zambia.

Durante su mandato, el Presidente Sata estuvo comprometido con la causa de la justicia social, prestando particular atención a los jóvenes del país. Bajo su liderazgo, Zambia siguió realizando grandes progresos en el cumplimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en lo que respecta a la matrícula en la escuela primaria y a la lucha contra malnutrición infantil y la malaria.

Ofrecemos nuestras profundas condolencias al Gobierno y al pueblo de la República de Zambia, a su esposa, la Dra. Christine Kaseba Sata, a su familia y

a sus parientes, así como a nuestros estimados amigos y colegas de la Misión de Zambia aquí en Nueva York.

El Presidente (*habla en inglés*): Tiene ahora la palabra el representante de los Estados Unidos de América, quien hablará en nombre del país anfitrión.

Sr. Pressman (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): En nombre de los Estados Unidos de América, quisiera expresar las profundas condolencias de mi Gobierno por el fallecimiento del Presidente de Zambia, Sr. Michael Chilufya Sata. Manifestamos nuestro pesar a la familia del Presidente y al pueblo de Zambia en este momento de duelo.

Rendimos homenaje a los años dedicados por el Presidente Sata al servicio de su país y a su liderazgo en la región de África Meridional. Se recordarán con respeto sus múltiples logros.

Observamos que el fallecimiento del Presidente Sata ocurrió precisamente días después de la celebración de los 50 años de independencia de Zambia. Los Estados Unidos se han considerado amigos del pueblo de Zambia en todos esos años y han reconocido la sólida tradición democrática de Zambia. Como el Presidente Obama le manifestó al Presidente Sata el 21 de octubre:

“El Gobierno de los Estados Unidos ha estado orgulloso de contar con Zambia como un asociado en sus primeros 50 años y espera con interés que esa asociación se fortalezca en los años venideros”.

Ofrecemos nuestras profundas condolencias.

Tema 70 del programa

Informe de la Corte Internacional de Justicia

Informe de la Corte Internacional de Justicia (A/69/4)

Informe del Secretario General (A/69/337)

El Presidente (*habla en inglés*): Doy la bienvenida al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, El Honorable Magistrado Peter Tomka, a la Asamblea General, quien presentará el informe de este año (A/69/4) sobre las actividades de la Corte.

El papel de la Corte Internacional de Justicia en la aplicación de los principios y normas de derecho internacional es esencial para promover el estado de derecho, las relaciones amistosas entre Estados y, en definitiva, la paz y la seguridad internacionales. En el informe de este año se revela una mayor actividad judicial y esfuerzos sostenidos tendientes a gestionar las causas con

mayor celeridad. Varias causas nuevas presentadas en el período sobre el que se informa demuestran que los Estados de todas las regiones del mundo han adquirido una gran confianza en la Corte y en su capacidad de impartir justicia.

Tengo ahora el honor de conceder el uso de la palabra al Magistrado Tomka.

Sr. Tomka, Presidente de la Corte Internacional de Justicia (*habla en inglés*): Antes de presentar el informe sobre las actividades de la Corte (A/69/4), deseo sumarme a los que han rendido homenaje al fallecido Presidente Michael Chilufya Sata de Zambia y expresar, en nombre del principal órgano judicial de las Naciones Unidas, nuestras sinceras condolencias y solidaridad al Gobierno y el pueblo de Zambia.

Quisiera dar las gracias a la Asamblea General por continuar con la práctica de permitir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia presentar un examen de las actividades judiciales de la Corte realizadas el año anterior. Esta práctica refleja el interés que ha demostrado la Asamblea en la Corte y su respaldo a este órgano judicial.

En los últimos 12 meses, la Corte ha seguido desempeñando su papel como foro de elección de los Estados para el arreglo pacífico de todo tipo de controversias internacionales que se incluyan en su jurisdicción. Como se ilustra en el informe que tengo el honor de presentar a los Estados Miembros hoy, la Corte ha realizado todos los esfuerzos posibles a fin de satisfacer de manera oportuna las expectativas de las partes que comparecen ante ella, en particular cuando se le presentan solicitudes para que indique medidas provisionales.

Durante el período sobre el que se informa, el número total de causas contenciosas que se encontraban ante la Corte era de 13; ahora es de 14. La Corte celebró audiencias en cuatro causas.

En primer lugar, la Corte celebró audiencias sobre tres solicitudes de medidas provisionales: en octubre de 2013, en la causa de *Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua)*, que se unió con la causa *Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)*; en noviembre de 2013, en la causa de la *Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)*; y en enero de 2014, en la causa *Cuestiones relativas a la incautación y detención de ciertos documentos y datos (Timor-Leste c. Australia)*. Después, en marzo de 2014,

la Corte celebró audiencias sobre el fondo de la causa *Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. Serbia)*. La Corte ahora examina esa causa y se encuentra actualmente en el proceso de elaboración de su sentencia, que tiene previsto emitir antes de la renovación trienal de su composición, la cual tendrá lugar en febrero próximo.

Durante el período sobre el que se informa, la Corte también dictó tres sentencias: la primera en la causa *Solicitud de interpretación del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia) (Camboya c. Tailandia)*, la segunda en la causa *Controversia marítima (Perú c. Chile)* y la tercera en la causa *Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. Japón)*. Además, dictó tres providencias en respuesta a solicitudes de medidas provisionales.

Como es tradición, informaré ahora brevemente sobre las principales decisiones de la Corte adoptadas durante el pasado año. Me referiré en primer lugar a cada una de las tres sentencias precedentemente mencionadas, antes de pasar a las providencias en respuesta a la causa de *Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua)* y a la causa *Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)*, y a la causa *Cuestiones relativas a la incautación y detención de ciertos documentos y datos (Timor-Leste c. Australia)*.

La primera sentencia dictada por la Corte durante el período objeto de examen se emitió el 11 de noviembre de 2013 en la causa de *Solicitud de interpretación del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia)*. El 28 de abril de 2011, el Reino de Camboya interpuso los procedimientos relativos a la interpretación, por los cuales se solicitó a la Corte que interpretara su sentencia dictada el 15 de junio de 1962. La Corte se ocupó de ello después de los incidentes ocurridos entre Camboya y Tailandia en la zona fronteriza cerca del Templo. En su demanda, Camboya afirmó que, a pesar de que “Tailandia no cuestionó la soberanía de Camboya en el Templo”, no obstante puso en entredicho la sentencia de 1962 en su totalidad por “denegar la soberanía de Camboya en la zona más allá del Templo en sus inmediaciones”. Por consiguiente, la demandante solicitó a la Corte que interpretara su sentencia de 1962, en la que había declarado, en el párrafo 2, que Tailandia tenía la obligación de retirar cualquier personal destacado por ella “en el Templo, o en sus inmediaciones, en el territorio camboyano”.

En su sentencia dictada el 11 de noviembre de 2013, la Corte en primer lugar consideró si se incluía en su competencia y si era admisible la petición realizada por Camboya de su interpretación. Esa solicitud se formuló de conformidad con el Artículo 60 del Estatuto de la Corte, en el que se establece que “[en] el caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance de [una] sentencia, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes”. Después de examinar si se han satisfecho las condiciones establecidas en el Artículo 60, la Corte llegó a la conclusión de que existía una diferencia entre las partes respecto del significado y el alcance de la sentencia de 1962. En ese sentido, señaló que la principal controversia se refería al ámbito territorial establecido en párrafo 2, a saber, la extensión territorial de las “inmediaciones” del Templo de Preah Vihear.

La Corte consideró que, sobre la base de los fundamentos de la sentencia de 1962, y a la luz de las alegaciones en los procedimientos iniciales, en el párrafo 2 de la sentencia de 1962 se requiere que Tailandia retire de la totalidad del territorio del promontorio de Preah Vihear todo el personal tailandés emplazado allí. En consecuencia, la Corte llegó a la conclusión que los términos “inmediaciones en el territorio camboyano” tenían que ser interpretados como que se extienden por lo menos a la zona en la que, en el momento de la demanda original, se descubrió que se había emplazado un destacamento de la policía tailandesa. La Corte señaló que esa conclusión fue confirmada por una serie de otros factores, en particular por el hecho de que la zona alrededor del templo se encuentra localizada sobre un accidente geográfico fácilmente identificable: un promontorio.

Hacia el este, el sur y el sudoeste, el promontorio cae en un acantilado escarpado hacia la llanura camboyana. En 1962 las partes estuvieron de acuerdo en que, en todo caso, esa escarpadura y el suelo a sus pies estaban bajo la soberanía de Camboya. Hacia el oeste y el noroeste, el terreno cae en una pendiente, menos pronunciada que la escarpadura pero no obstante pronunciada, hacia el valle que separa Preah Vihear de la vecina colina de Phnom Trap, un valle que, a su vez, se desvanece en el sur de la llanura camboyana.

La Corte consideró que Phnom Trap quedaba fuera de la zona controvertida y que en la sentencia de 1962 no se abordó la cuestión de si se encontraba en territorio tailandés o camboyano. En consecuencia, la Corte consideró que el promontorio de Preah Vihear terminaba a los pies de la colina de Phnom Trap, es decir, donde el terreno comienza a ascender desde el valle. En el norte, llegó a la conclusión de que el fundamento en la sentencia de

1962 demostró que la Corte consideró que el territorio de Camboya se extendía hasta la línea que figura en el mapa adjunto a sus alegaciones en los procedimientos originales, el denominado mapa del anexo I, que había sido aceptado por las partes. Por lo tanto, la Corte decidió que en el norte el límite del promontorio es la línea que figura en el mapa del anexo I, desde un punto hacia el noreste del Templo donde esa línea colinda con la escarpadura hasta un punto en el noroeste, donde el suelo empieza a subir desde el valle al pie de la colina de Phnom Trap.

Después la Corte examinó la relación existente entre el párrafo 2 y el resto de la parte dispositiva de la sentencia. Consideró que el ámbito territorial de los tres párrafos de la parte dispositiva era el mismo: la conclusión en el párrafo 1 de que “el Templo de Preah Vihear está situado en el territorio bajo la soberanía de Camboya” debe ser tomado como una referencia, al igual que los párrafos 2 y 3, a la totalidad del territorio del promontorio de Preah Vihear.

Por último, la Corte señaló que el Templo de Preah Vihear es un lugar de importancia religiosa y cultural para los pueblos de la región y ahora figura como sitio declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Al respecto, recordó que con arreglo al artículo 6 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de 1972, de la cual ambos Estados son partes, Camboya y Tailandia deben cooperar entre sí y con la comunidad internacional en la protección del sitio como patrimonio mundial. Además, cada Estado tiene la obligación de no “adoptar ninguna medida deliberada que pudiera perjudicar directa o indirectamente” a dicho patrimonio. En el contexto de esas obligaciones, la Corte recalcó la importancia de garantizar el acceso al Templo desde la llanura camboyana.

En la parte dispositiva de su sentencia, la Corte consideró que Camboya tenía soberanía en todo el territorio del promontorio de Preah Vihear, como se definió anteriormente, y que, como consecuencia, a Tailandia le incumbía la obligación de retirar de ese territorio las fuerzas militares y policiales y otros guardias o custodios tailandeses que estuvieran emplazados allí.

También durante el período objeto de examen, el 27 de enero de 2014 la Corte dictó una segunda sentencia sobre la demarcación de la frontera entre las zonas marítimas de Perú y Chile en el Océano Pacífico: *Controversia marítima (Perú c. Chile)*. El Perú argumentó que no existían fronteras marítimas acordadas entre él y Chile, y pidió a la Corte que trazara una línea fronteriza utilizando el método de la equidistancia a fin de lograr

un resultado equitativo. Por otra parte, Chile sostuvo que a la Corte no le correspondía establecer una línea fronteriza, puesto que un acuerdo internacional sobre fronteras marítimas entre las partes ya existía. Según Chile, seguía el paralelo de latitud que pasa a través del punto de partida de la frontera terrestre entre Chile y el Perú y se extendía al menos hasta 200 millas náuticas, como se indica en el mapa que se ha distribuido.

A fin de resolver la controversia, la Corte primeramente trató de determinar si, como Chile reivindicaba, ya existía un acuerdo sobre la frontera marítima. A tal fin, examinó diversos instrumentos que le presentaron las partes, y, en particular, las proclamaciones de 1947, en virtud de las cuales el Perú y Chile habían proclamado unilateralmente cada uno ciertos derechos marítimos que se extendían 200 millas náuticas desde sus costas respectivas, así como la Declaración de Santiago de 1952 sobre Zona Marítima, en la que Chile, el Ecuador y el Perú

“proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas.”

Sin embargo, la Corte llegó a la conclusión de que ninguno de esos instrumentos establecía una frontera marítima entre el Perú y Chile.

A continuación, la Corte procedió a examinar una serie de arreglos y acuerdos ulteriores entre el Perú, Chile y el Ecuador. En particular, analizó un documento que data de 1954, el Convenio sobre zona especial fronteriza marítima, por el que se estableció una zona de tolerancia, a partir de una distancia de 12 millas marinas de la costa, “de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países”. La Corte llegó a la conclusión de que las disposiciones de dicho instrumento reconocían, en un acuerdo internacional vinculante, que ya existía una frontera marítima. Sin embargo, la Corte señaló que el texto no indicaba cuándo y cómo se había acordado esa frontera. Por lo tanto, la Corte concluyó que el reconocimiento expreso de las partes de la existencia de una frontera marítima solo puede reflejar un acuerdo tácito que se había alcanzado anteriormente y que se había consolidado gracias al Convenio sobre zona especial fronteriza marítima de 1954. Sin embargo, la Corte observó que en ese Acuerdo no se daba ninguna indicación sobre la naturaleza de la frontera marítima, ni tampoco se especificaba su alcance, aunque sus disposiciones

dejaron claro que la frontera marítima se extendía más allá de 12 millas marinas de la costa.

A la luz de esa conclusión, la Corte abordó entonces la cuestión de la naturaleza de la frontera marítima. Destacando que el acuerdo tácito entre las partes debe entenderse en el contexto de las proclamaciones de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952, en que se expresaron reclamaciones de los fondos marinos y las aguas suprayacentes de los fondos marinos y sus recursos, sin que las partes hubieran trazado una línea divisoria entre esos espacios, la Corte llegó a la conclusión de que la frontera marítima es válida desde todos los puntos de vista.

A continuación, la Corte trató de determinar el alcance de la frontera marítima acordada. Empezó examinando la práctica de las partes a comienzos y mediados del decenio de 1950, comenzando con el potencial y la actividad de la pesca. La Corte observó que la información a que las partes se referían puso de manifiesto que las especies capturadas a principios del decenio de 1950 se encontraban, por lo general, dentro de un espacio de 60 millas náuticas desde la costa. Al tiempo que recordaba que, dada la validez desde todos los puntos de vista de la frontera marítima, las pruebas relativas a la actividad pesquera no pueden por sí mismas determinar la frontera, la Corte consideró que esas actividades parecen indicar que, en el momento en que las partes reconocieron la existencia de una frontera marítima acordada entre ellos, era poco probable que hubieran considerado que se extendía hasta el límite de 200 millas náuticas.

Posteriormente, la Corte pasó a examinar el contexto en su conjunto y estudió la evolución del derecho del mar a principios de los años 1950. En particular, señaló que las reclamaciones de una zona marítima de al menos 200 millas náuticas, como las realizadas por las partes en la Declaración de Santiago de 1952, no se correspondían con el derecho internacional del período. Sobre la base de las actividades pesqueras de las partes en aquel momento, la práctica pertinente de otros Estados y la labor de la Comisión de Derecho Internacional sobre el Derecho del Mar, la Corte consideró que las pruebas de que disponía no le permitían llegar a la conclusión de que la frontera marítima acordada a lo largo del paralelo se extendiera más allá de 80 millas náuticas contadas desde su punto de partida. A la luz de esta conclusión provisional, la Corte siguió examinando elementos de la práctica, en su mayor parte después de 1954, pero concluyó que no llevaban a modificar su posición.

A continuación, la Corte pasó a abordar la cuestión del punto de partida de la frontera marítima acordada.

Después de prestar especial atención a los documentos que habían llevado a la concertación de acuerdos en virtud de los cuales, en 1968 y 1969, las partes decidieron construir faros “que materialicen el paralelo de la frontera marítima que se origina en” el Hito núm. 1 a lo largo de la frontera terrestre, la Corte llegó a la conclusión de que el punto de partida de la frontera marítima entre las partes se encuentra en la intersección con el paralelo de latitud que pasa a través del Hito núm. 1 con la línea de marea baja.

A continuación, la Corte procedió a determinar el trazado de la frontera marítima desde el punto final de la línea acordada. A ese fin, aplicó el método habitual, como se explica en detalle en su fallo sobre la causa relativa a la *Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania c. Ucrania)*. La Corte concluyó que la frontera marítima entre las partes comienza en la intersección del paralelo de latitud que pasa a través del Hito núm. 1 con la línea de marea baja, y se extiende 80 millas náuticas a lo largo de ese paralelo de latitud hasta un punto que se indica en el mapa núm. 4, que se ha distribuido, como Punto A. Desde ese punto, la frontera marítima se extiende a lo largo de la línea de equidistancia hasta el punto indicado en el mapa como punto B, y, posteriormente, a lo largo de la medida de límite de las 200 millas náuticas desde las líneas de base de Chile hasta el punto señalado como punto C.

Antes de concluir mi resumen de esta causa, quisiera señalar a la atención de la Asamblea la segunda alegación del Perú, en la que pedía a la Corte que falle y declare que, más allá del punto en que termina la frontera marítima común, está facultado a ejercer derechos soberanos sobre una zona marítima que se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas contadas desde sus líneas de base. La reclamación relativa a la zona está marcada con una sombra de azul más oscura en el croquis del mapa núm. 2, que, tengo entendido, se ha distribuido. Sin embargo, la Corte sostuvo que, dado que ya había concluido que la delimitación acordada terminaba a 80 millas náuticas de la costa y que también había decidido que más allá de ese punto delimitaría los derechos marítimos de las partes estableciendo una línea de equidistancia, la segunda alegación del Perú no tenía efecto. Por lo tanto, la Corte no se pronunció sobre la misma.

A la luz de las circunstancias particulares del caso, la Corte determinó el trazado de la frontera marítima entre las partes sin especificar sus coordenadas geográficas precisas. En sus presentaciones finales recordó que las partes no habían solicitado que la Corte lo hiciera así. En consecuencia, la Corte invitó al Perú y Chile

a que determinaran esas coordenadas de conformidad con lo dispuesto en su fallo, en un espíritu de buena vecindad; y los dos Estados, de hecho, procedieron a hacerlo solo unos meses después de que la Corte dictara su fallo. Cabe por lo tanto recalcar que, dos meses después de que se dictara la sentencia, ambas partes y sus Gobiernos alcanzaron un acuerdo conjunto sobre las coordenadas geográficas precisas de su frontera marítima basándose en la descripción incluida en la sentencia de la Corte.

(continúa en francés)

El 31 de marzo de 2014, la Corte dictó una tercera sentencia en la causa relativa a la *Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. Japón)* y Nueva Zelandia intervino de conformidad con el artículo 63 del Estatuto. La demanda había sido interpuesta en mayo de 2010 por Australia, quien acusó a Japón de

“la continuación de un programa en gran escala de caza de la ballena en el marco de la segunda fase del Programa Japonés de Investigación de Cetáceos en el Antártico mediante un Permiso Especial (JARPA II), que constituye una infracción de las obligaciones asumidas por el Japón en virtud de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena [...] así como de otras de sus obligaciones internacionales respecto de la preservación de los mamíferos marinos y el medio marino”.

A fin de resolver la controversia, la Corte empezó abordando la cuestión de su competencia, que había sido impugnada por el Japón argumentando que la controversia quedaba comprendida en una reserva de la declaración de Australia relativa a la aceptación de la competencia obligatoria de la Corte. Sin embargo, la Corte opinó que dicha reserva sólo se aplicaba cuando existía una controversia entre las partes relativa a la delimitación de zonas marítimas, caso que no se daba en esta controversia. Por consiguiente, la Corte concluyó que no era posible aceptar la objeción del Japón a su competencia.

A continuación la Corte se refirió al fondo de la causa: la interpretación y la aplicación del artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, que dice lo siguiente en la parte pertinente del párrafo 1:

“No obstante lo dispuesto en otras disposiciones de la presente Convención, cualquier gobierno contratante podrá otorgar a cualquiera de sus nacionales un permiso especial que lo autorice a matar, cazar y faenar ballenas con fines de

investigación científica, con sujeción a las limitaciones de cantidad y de otra índole que los gobiernos contratantes juzguen adecuadas.”

En cuanto a la interpretación de esa disposición, la Corte empezó observando que el artículo VIII da a los Estados partes discrecionalidad para rechazar una solicitud de permiso especial o especificar las condiciones en que se otorgará un permiso, pero que la cuestión de si la matanza, la caza y la faena de ballenas con arreglo a un permiso especial solicitado es para fines de investigación científica no puede depender simplemente de la percepción de ese Estado. La Corte examinó seguidamente el significado de la frase “para fines de investigación científica” contenida en el artículo y concluyó que los dos elementos de dicha frase son acumulativos. En consecuencia, aun cuando un programa de caza de ballenas comprenda la investigación científica, la matanza, la caza y la faena de ballenas en aplicación de dicho programa, dichas actividades no están comprendidas en el artículo VIII a menos que se lleven a cabo con fines de investigación científica.

En lo relativo a la aplicación del párrafo 1 del artículo VIII, la Corte concluyó que JARPA II podría describirse de manera general como un programa de investigación científica. A continuación la Corte intentó determinar si la utilización de métodos letales se realizaba con fines de investigación científica y para ello consideró si los elementos del diseño y la aplicación del programa eran razonables en relación con el logro de sus objetivos de investigación declarados. A ese respecto, la Corte examinó, entre otros, los siguientes elementos: las decisiones relativas a la utilización de métodos letales; la escala de la utilización de muestreos letales por el programa; la metodología utilizada para seleccionar el tamaño de las muestras; una comparación entre el tamaño previsto de las muestras y la caza efectiva; el marco temporal vinculado con el programa; el producto científico del programa; y el grado en que el programa coordinaba sus actividades con proyectos de investigación conexos.

A raíz de su examen, la Corte concluyó que, en conjunto, el programa JARPA II comprendía actividades que podían caracterizarse generalmente como investigación científica, pero que “las pruebas no establecen que el diseño y la aplicación del programa sean razonables en relación con el logro de sus objetivos declarados”. La Corte concluyó que los permisos especiales otorgados por el Japón para la matanza, la caza y la faena de ballenas en relación con el programa JARPA II no eran “con fines de investigación científica” con arreglo al párrafo 1 del artículo VIII de la Convención.

La Corte consideró posteriormente las consecuencias de dicha conclusión, a la luz de la afirmación de Australia de que el Japón había violado varias disposiciones del Anexo de la Convención. En opinión de la Corte, a pesar de las diferencias de redacción, todas las actividades de caza de la ballena que no están comprendidas en el párrafo 1 del artículo VIII de la Convención, con excepción de la caza aborigen de ballenas para subsistencia, estaban sujetas a las tres disposiciones en cuestión del Anexo. Por consiguiente, la Corte concluyó que el Japón había violado, en primer lugar, la moratoria de la caza comercial de la ballena cada uno de los años en los que había otorgado permisos para el programa JARPA II en los que se fijaran límites de captura superiores a cero para las ballenas enanas, las ballenas de aleta y las ballenas jorobadas; en segundo lugar, la moratoria de buques factoría en cada una de las temporadas en que se habían cazado, matado y faenado ballenas de aleta en el programa JARPA II; y, en tercer lugar, la prohibición de la caza comercial en el Santuario Ballenero Austral en cada una de las temporadas del programa JARPA II durante las cuales se habían capturado ballenas de aleta. No obstante, la Corte determinó que, contrariamente a lo que Australia había afirmado, el Japón había cumplido los requisitos de otra disposición del Anexo según la cual cada Gobierno contratante debe poner a disposición de la Comisión Ballenera Internacional los permisos propuestos con suficiente antelación a fin de que sean examinados y comentados por el Comité Científico.

A la luz de sus conclusiones, la Corte abordó a continuación la cuestión de las reparaciones. La Corte observó que JARPA II era un programa en curso y que, habida cuenta de las circunstancias, se justificaban medidas que fueran más allá de una sentencia declaratoria. Por consiguiente, la Corte ordenó que el Japón revocara todas las autorizaciones, permisos o licencias vigentes para matar, cazar o faenar ballenas en relación con el programa JARPA II y se abstuviera de otorgar nuevos permisos con arreglo al párrafo 1 del artículo VIII de la Convención en cumplimiento de dicho programa. Por otra parte, la Corte no estimó necesario ordenar la reparación adicional solicitada por Australia, consistente en exigir que el Japón se abstuviera de autorizar o cumplir cualquier permiso especial de caza de la ballena que no fuera para fines de investigación científica en el sentido del artículo VIII. En opinión de la Corte, esa obligación se aplicaba ya a todos los Estados partes.

También quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar a la atención de la Asamblea el hecho de que la Corte recurre cada vez más al procedimiento de

deliberación previsto en el artículo 1 de la resolución relativa a la práctica judicial interna de la Corte, cuyo primer párrafo señala lo siguiente:

“Una vez finalizado el procedimiento escrito previo al inicio del procedimiento oral, se celebra una deliberación en la cual los magistrados intercambian sus puntos de vista relativos a la causa y señalan a la atención de la Corte cualquier cuestión en relación con la cual consideran que puede ser necesario pedir explicaciones durante el transcurso del procedimiento oral.”

De ese modo, ese tipo de deliberaciones permite a la Corte identificar cualquier cuestión sobre la que quisiera recibir más explicaciones o aclaraciones durante las vistas orales sobre el fondo de una causa. Una vez que ha concluido sus deliberaciones, la Corte comunica, en consecuencia, sus preguntas a las partes, con miras a orientar sus exposiciones orales para que faciliten la información adicional que necesita la Corte en el curso de las audiencias. Se trata de un procedimiento particularmente útil en las causas con gran contenido científico, o cuando los antecedentes de hecho son especialmente complejos. Por lo demás, la Corte ha celebrado una deliberación de ese tipo en la causa relativa a la *Caza de la ballena*, procedimiento al que había recurrido igualmente en la causa entre el Ecuador y Colombia relativa a la *Fumigación aérea con herbicidas (Ecuador c. Colombia)*, y que fue resuelta por las partes antes del comienzo de las audiencias sobre el fondo de la cuestión.

Como ya he señalado, durante el período que se examina, la Corte también dictó tres providencias, que voy a presentar brevemente en orden cronológico.

La primera de ellas se dictó el 22 de noviembre de 2013 en la causa relativa a *Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua)*. Esa decisión siguió una solicitud para la indicación de nuevas medidas cautelares presentadas el 24 de septiembre de 2013 por Costa Rica. Este país protestaba contra la construcción por Nicaragua de dos nuevos caños o canales en el “territorio en disputa”, tal como define la Corte en una providencia de medidas provisionales, de 8 de marzo de 2011, a saber, la parte septentrional de la Isla Portillos, es decir, la zona de humedales de unos 3 kilómetros cuadrados entre la ribera derecha del caño objeto de controversia, la ribera derecha del río San Juan hasta su desembocadura en el Mar Caribe y la Laguna Harbour Head.

En su providencia de 22 de noviembre de 2013, la Corte sostuvo que no tenía suficientes pruebas ante sí

para llegar a la conclusión de que, habida cuenta de la duración, amplitud y localidad de una zanja cavada cerca del mayor de los dos nuevos canales —el caño oriental— había un riesgo real de que alcanzara el Mar Caribe como consecuencia de la acción humana o natural, o de una combinación de ambas. Eso podría causar que el río San Juan cambie su curso, con graves consecuencias para los derechos que reclama Costa Rica en la causa. Por consiguiente, la Corte decidió no solo reiterar las medidas provisionales que indica en su providencia de 8 de marzo de 2011, sino también ordenar nuevas medidas. Declaró que Nicaragua debe abstenerse de realizar cualquier tipo de dragado y de otras actividades en el territorio objeto de controversia y que, en particular, debe abstenerse de trabajos de todo tipo en los dos nuevos caños, y llenar la zanja en la playa al norte del caño oriental.

Unas semanas más tarde, el 13 de diciembre de 2013, la Corte dictó una providencia en la causa relativa a la *Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica)*. En su solicitud de indicación de medidas provisionales, Nicaragua afirmó que trataba de proteger ciertos derechos que declaró estaban amenazados por obras viales que Costa Rica estaba llevando a cabo, en particular los movimientos transfronterizos resultantes de los sedimentos y otros desechos.

Sin embargo, la Corte concluyó que las circunstancias, tal como se presentaban ante ella, no requerían el ejercicio de su facultad de dictar medidas provisionales. En particular, la Corte consideró que Nicaragua no había demostrado que las obras de construcción hubieran llevado a un aumento sustantivo de la carga de los sedimentos en el río y no había presentado pruebas de los efectos a largo plazo para el río derivados del aumento del nivel del río presuntamente causados por el aumento de los sedimentos que procedían de la construcción de la carretera. El demandante tampoco explicó cómo determinadas especies de los humedales en el río podrían correr peligro debido a la construcción de carreteras, ni especificó con precisión qué especies podrían probablemente verse afectadas.

Por último, la Corte dictó una tercera providencia para la indicación de medidas cautelares en la causa relativa a *Cuestiones relacionadas con la incautación y retención de ciertos documentos y datos (Timor-Leste c. Australia)*. Esa decisión siguió a una solicitud presentada el 17 de diciembre de 2013 por Timor-Leste a causa de la incautación el 3 de diciembre de 2013 y la posterior detención por “agentes de Australia de documentos, datos y otros bienes que pertenecen a Timor-Leste y/o

sobre los que Timor-Leste tiene derecho a proteger en virtud del derecho internacional”. Timor-Leste alegó que los artículos incautados incluían documentos, datos y correspondencia entre Timor-Leste y sus asesores jurídicos relativos al Arbitraje pendiente con arreglo al Tratado del Mar de Timor, de 20 de mayo de 2002, entre Timor-Leste y Australia.

En su decisión de 3 de marzo de 2014, la Corte estimó que el derecho de Timor-Leste a llevar adelante el procedimiento arbitral y las negociaciones sin interferencia podría sufrir un daño irreparable si Australia no salvaguardase inmediatamente la confidencialidad de los materiales incautados por sus agentes el 3 de diciembre de 2013 de la oficina de un asesor jurídico del Gobierno de Timor-Leste. Sin embargo, la Corte observó que el Fiscal General de Australia había presentado un compromiso escrito de fecha 21 de enero de 2014, que contiene seguridades de que el material incautado no se pondrá a disposición de ninguna parte del Gobierno de Australia para ningún fin relacionado con la explotación de recursos en el Mar de Timor o negociaciones conexas, o relacionado con la tramitación de esa causa ante la Corte o las actuaciones del Tribunal sobre el Mar de Timor constituido con arreglo al Tratado.

No obstante, después de tener en cuenta el hecho de que, en determinadas circunstancias que involucren a la seguridad nacional, el Gobierno de Australia contempló la posibilidad de hacer uso de los materiales incautados, la Corte estimó que, si bien el compromiso escrito hizo una importante contribución a la mitigación del riesgo inminente de perjuicio irreparable creado por la incautación de los materiales mencionados anteriormente a los derechos de Timor-Leste, no eliminaba enteramente ese riesgo. En consecuencia, la Corte llegó a la conclusión de que se habían reunido las condiciones requeridas por su Estatuto para la indicación de medidas provisionales. Además, el 3 de septiembre, la Corte decidió aceptar una solicitud conjunta de las partes para aplazar los procedimientos orales entre Timor-Leste y Australia. Se preveía que esos procedimientos se iniciarán el miércoles 17 de septiembre de 2014 y se cerrarán el miércoles 24 de septiembre de 2014.

Tras recordar las principales decisiones dictadas por la Corte Internacional de Justicia en el curso del año pasado, me referiré ahora a las nuevas causas que se le han presentado.

Además de las actuaciones entre Timor-Leste y Australia iniciadas en diciembre de 2013, que acabo de examinar, en septiembre de 2013 la Corte había recibido

una solicitud de Nicaragua por la que se instituía un procedimiento contra Colombia, en el que se pedía a la Corte que, en primer lugar, determinase

“el curso preciso de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de plataforma continental que le corresponden a cada uno más allá de las fronteras fijadas por la Corte en su sentencia de 19 de noviembre de 2012”,

y, en segundo lugar, que declare

“los principios y las normas de derecho internacional que determinan los derechos y las obligaciones de los dos Estados en relación con la zona en que se superponen las reclamaciones relativas a la plataforma continental y el uso de sus recursos, hasta que se determine el límite marítimo entre ellas más allá de las 200 millas náuticas contadas a partir de la costa de Nicaragua”.

En noviembre de 2013, la Corte se ocupó de nuevos procedimientos de Nicaragua contra Colombia en relación con una controversia relativa a

“la violación de los derechos soberanos y a las zonas marítimas de Nicaragua declaradas por el fallo de la Corte de 19 de noviembre de 2012 en la causa relativa a la *Controversia territorial y marítima (Nicaragua c. Colombia)* y la amenaza del uso de la fuerza por Colombia a fin de cometer esas violaciones”.

Más adelante, el 25 de febrero, la Corte se ocupó de una disputa entre Costa Rica y Nicaragua en la causa relativa a la Delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica contra Nicaragua). Por otro lado, el hecho de que la Corte se ocupe de un asunto de este tipo reviste un carácter histórico, puesto que se trata de la primera vez que un Estado solicita a la Corte que proceda a delimitar una frontera marítima entre dos Estados en ambos lados de sus respectivos territorios continentales, ya que la delimitación reivindicada ante la Corte se realizará en el Mar Caribe por una parte y en el Océano Pacífico por otra.

El 24 de abril, las Islas Marshall presentaron nueve requerimientos al Registro de la Corte, en los que acusaba a nueve Estados de no cumplir con sus obligaciones relativas al desarme nuclear y al cese de la carrera de armamentos nucleares con prontitud. Si bien los requerimientos presentados contra la India, el Pakistán y el Reino Unido se pudieron inscribir en el Registro de la Corte, puesto que dichos Estados han reconocido la competencia obligatoria de la Corte en virtud del

párrafo 2 del artículo 36 del Estatuto, no se pudo hacer lo mismo con los seis restantes requerimientos presentados contra China, la República Popular Democrática de Corea, Francia, Israel, la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América. Con respecto a cada uno de estos últimos requerimientos, la República de las Islas Marshall indicó que buscaba, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 38 del reglamento de la Corte, basar la competencia de la Corte en el consentimiento del Estado afectado en virtud de la doctrina de *forum prorogatum*. Sin dicho consentimiento, ninguno de los requerimientos puede inscribirse en la lista de la Corte.

Por último, el 28 de agosto, la República Federal de Somalia presentó una instancia contra la República de Kenya con respecto a una disputa relativa a la *Delimitación Marítima en el Océano Índico (Somalia contra Kenya)*. Más concretamente, Somalia reclama que los dos Estados están en desacuerdo sobre el emplazamiento de su frontera marítima común y ruega a la Corte

“que determine, conforme al derecho internacional, el trazado completo de la frontera marítima única que divide todas las zonas marítimas que pertenecen a Somalia y a Kenya en el Océano Índico, incluida la plataforma continental más allá del límite de las 200 millas marinas”.

Conviene subrayar que ambos Estados han hecho una declaración en la que aceptan como obligatoria la competencia de la Corte en virtud del párrafo 2 del artículo 36 de su Estatuto.

Esto eleva a siete el número de nuevas causas presentadas durante el período de referencia y a 14 el número total de causas inscritas hasta la fecha en la lista de casos de la Corte. Como acabo de ilustrar, la Corte siempre procura que las disputas que se le presentan se resuelvan con prontitud, con el fin de reducir, o incluso eliminar, los casos pendientes. Se han visto todas las causas inscritas en el registro general de la Corte cuyo procedimiento por escrito ya está cerrado, y actualmente se encuentran en la fase de deliberaciones. De ese modo, la Corte está siempre dispuesta a cumplir su noble misión judicial con imparcialidad y eficacia, contando con la cooperación de las partes en los litigios que se le presentan con el fin de resolverlas en un plazo razonable.

A modo de ejemplo, basta con recordar que la Corte efectuó todos los preparativos necesarios para celebrar las audiencias públicas en septiembre de 2014 en la causa sobre las *Cuestiones relacionadas con la incautación y retención de ciertos documentos y datos (Timor-Leste*

c. Australia). Solo después de recibir una solicitud conjunta de las partes para posponer las audiencias orales, la Corte decidió aplazar los procedimientos.

La Corte también continuó con sus actividades extrajudiciales durante el último año, en particular, la organización de una conferencia para celebrar el centenario del Palacio de la Paz, el 23 de septiembre de 2013. En el marco de esta conferencia, que se articuló alrededor del tema “La Corte Internacional de Justicia al servicio de la paz y la justicia”, la Corte tuvo la oportunidad de acoger a eminentes personalidades y de presentar a unos ponentes de gran calidad en las mesas redondas. El programa del acto estuvo muy cargado, aunque perfectamente equilibrado, puesto que no solo llevó a todos los oradores y al público a centrarse en el pasado y el presente de la justicia internacional, sino también a reflexionar sobre las perspectivas y los desafíos que se le presentan en el futuro, en particular a la Corte. Me complace informar a la Asamblea de la publicación, el pasado julio, de una obra colectiva titulada *Enhancing the Rule of Law through the International Court of Justice*, sobre las conclusiones de la conferencia celebrada en ocasión del centenario del Palacio de la Paz.

Para terminar, quisiera recordar que la Corte debe hacer todo lo posible a favor de los nobles propósitos y objetivos de las Naciones Unidas con unos recursos modestos, puesto que los Estados Miembros le destinan menos de un 1% de su presupuesto ordinario. No obstante, espero haber demostrado que las recientes contribuciones de la Corte no deben medirse por sus recursos económicos, sino más bien por los grandes progresos que ha realizado en el plano de la justicia internacional y del arreglo pacífico de las controversias entre los Estados.

Sin embargo, quisiera insistir en la importancia de los Estados Miembros en lo referente a la composición de la Corte. Sobre ellos recae una importante responsabilidad, puesto que son ellos los que deben elegir a los miembros de la Corte, a quienes se les encargará una gran y noble función judicial. Por tanto, la calidad del principal órgano judicial de las Naciones Unidas depende, en gran medida, de la aportación de los Estados Miembros al respecto. En el mismo orden de cosas, quisiera aprovechar la ocasión para recordar a la Asamblea que, a pesar de los numerosos llamamientos que ha hecho la Asamblea General y de su aprobación de ciertos documentos, el número de Estados que han formulado una declaración reconociendo la obligatoriedad de la competencia de la Corte en virtud del párrafo 2 del artículo 36 de su Estatuto se ha mantenido en 70 durante el período que se examina.

Esperamos que las declaraciones formuladas por ciertos Estados en las que expresan su voluntad de reconocer la jurisdicción del principal órgano judicial de las Naciones Unidas así como los documentos aprobados con tal fin dé lugar a un mayor reconocimiento de la competencia de la Corte en la comunidad internacional en forma de declaraciones relacionadas con el párrafo 2 del artículo 36. Considero que la Asamblea General, en tanto que foro de distinguidos diplomáticos que trabajan específicamente en el seno de la comunidad de las naciones, tiene el privilegio de poder promover esa idea entre los Gobiernos representados en la Asamblea. Por consiguiente, le reitero mi invitación para que trate de promover el recurso a la Corte con el fin de resolver las controversias, así como para aumentar el reconocimiento de su competencia obligatoria, como medios para resolver pacíficamente los conflictos internacionales y armonizar las relaciones interestatales.

Quisiera dar las gracias a las delegaciones de Botswana, el Japón, Lituania, los Países Bajos, Suiza, el Reino Unido y el Uruguay por haber tenido la iniciativa de preparar un manual para aceptar la jurisdicción de la Corte, que se publicará en cinco idiomas. Celebro la publicación de dicho manual, que será de gran utilidad.

Deseo dar las gracias a la Asamblea General por haberme brindado la oportunidad de intervenir hoy ante ella y le deseo mucho éxito en su sexagésimo noveno período de sesiones.

Sr. Dehghani (República Islámica del Irán) (*habla en inglés*): Tengo el honor de formular esta declaración en nombre del Movimiento de los Países No Alineados.

El Movimiento de los Países No Alineados otorga gran importancia al tema 70 del programa, titulado “Informe de la Corte Internacional de Justicia”, y toma nota del informe sobre las actividades de la Corte del 1 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2014 (A/69/4), conforme a lo solicitado por la decisión de la Asamblea del año pasado. También quiero dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia por su presentación de hoy del informe a la Asamblea.

El Movimiento de los Países No Alineados reafirma y subraya sus posiciones de principios relativos a la solución pacífica de las controversias y al no uso o amenaza del uso de la fuerza. La Corte Internacional de Justicia desempeña un papel importante en la promoción y el fomento de la solución de las controversias internacionales por medios pacíficos, como se refleja en la Carta de las Naciones Unidas, y de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

El Movimiento de los Países No Alineados trata de realizar más progresos para lograr el pleno respeto del derecho internacional y, en ese sentido, elogia el papel de la Corte Internacional de Justicia en la promoción de la solución pacífica de las controversias internacionales, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte, en particular, los Artículos 33 y 94 de la Carta.

Con respecto a las opiniones consultivas de la Corte, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad no solicita ninguna opinión consultiva a la Corte desde el año 1970, el Movimiento de los Países No Alineados insta al Consejo de Seguridad a aprovechar más a la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, en tanto que fuente de opiniones consultivas e interpretación de las normas pertinentes del derecho internacional, y en relación con las cuestiones controvertidas. Asimismo, pide al Consejo que recurra a la Corte para interpretar el derecho internacional pertinente y también insta al Consejo a examinar sus decisiones que están siendo estudiadas por la Corte, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

El Movimiento de los Países No Alineados también invita a la Asamblea General, a otros órganos de las Naciones Unidas y a los organismos especializados debidamente autorizados a solicitar opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia sobre cuestiones jurídicas que surjan en la esfera de sus competencias.

El Movimiento de los Países No Alineados reafirma la importancia de la opinión consultiva unánime que la Corte Internacional de Justicia emitió el 8 de julio de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares (véase A/51/218). Al respecto, la Corte llegó a la conclusión de que es obligatorio emprender de buena fe las negociaciones y concluir las para lograr el desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y eficaz.

El Movimiento de los Países No Alineados sigue pidiendo a Israel, la Potencia ocupante, que respete plenamente la opinión consultiva que emitió la Corte el 9 de julio de 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado (A/ES-10/273), y exhorta a todos los Estados a respetar y garantizar el respeto de las disposiciones que figuran en ella para alcanzar el fin de la ocupación israelí que comenzó en 1967 y la independencia del Estado de Palestina, con Jerusalén Oriental como su capital.

Sr. Mamabolo (Sudáfrica) (*habla en inglés*): Mi delegación tiene el honor de formular esta declaración en nombre del Grupo de Estados de África.

En primer lugar, el Grupo de Estados de África desea dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado Peter Tomka, por el informe (A/69/4) y por su presentación. El Grupo sigue considerando que la Corte Internacional de Justicia es el mecanismo por excelencia para resolver de manera pacífica las controversias en el ámbito internacional. Hay que tener en cuenta que la Corte, en tanto que tribunal de justicia y, además, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ocupa un lugar especial. Todo lo que hace esta Corte mundial tiene como objetivo promover el estado de derecho. La Corte dicta sentencias y da opiniones consultivas de conformidad con su Estatuto, que es una parte esencial de la Carta de las Naciones Unidas, y contribuye de ese modo a fomentar y aclarar el derecho internacional.

El Grupo de Estados de África acoge con satisfacción la confianza que los Estados han demostrado en su capacidad para resolver sus controversias. En particular, nos complace ver que los Estados continúan remitiendo controversias a la Corte. El número de causas pendientes que figuran su agenda es un reflejo de la alta estima en que los Estados tienen a la Corte.

A pesar de la proliferación de los mecanismos para resolver judicialmente las controversias internacionales, ya sea en un formato especializado o regional, la Corte Internacional de Justicia sigue atrayendo una gran variedad de causas, que abarcan muchos ámbitos. En la lista de causas que tiene pendientes la Corte hay algunas relativas a la demarcación de fronteras, como la de Perú contra Chile.

El Grupo de Estados de África agradece que el Tribunal se fijase un calendario especialmente exigente de audiencias y deliberaciones para poder examinar varias causas al mismo tiempo y atender lo antes posible los procedimientos incidentales, cuyo número va en aumento, como son las solicitudes de medidas preliminares y provisionales. En ese sentido, el 3 de marzo de 2014, la Corte emitió su orden en respuesta a la solicitud de medidas provisionales presentada por Timor-Leste en diciembre de 2013 en la causa *Cuestiones relativas a la incautación y detención de ciertos documentos e información (Timor-Leste contra Australia)*. La Corte falló que tenía jurisdicción *prima facie* para pronunciarse sobre el fondo del caso en vista de las declaraciones realizadas por ambas partes en relación con el artículo 36 2)

del Estatuto de la Corte. Asimismo, la Corte dictaminó que existía una relación entre los derechos reclamados y las medidas provisionales solicitadas por Timor-Leste. Tales medidas tenían como objeto impedir que Australia pudiese seguir accediendo al material incautado. La Corte concluyó que se habían cumplido las condiciones exigidas por el Estatuto para indicar medidas provisionales porque “todavía existía el riesgo de sufrir perjuicios irreparables”.

El Grupo de Estados de África opina que la causa *Australia contra el Japón* contribuye a la legislación que rige el medio ambiente, en particular con respecto al derecho del mar. Australia inició el procedimiento el 31 de mayo de 2010. El 31 de marzo de 2014, la Corte Internacional de Justicia dictó sentencia, y, en lo que se refiere a la competencia de la Corte, esta consideró que, dado que no existe ninguna controversia entre las partes sobre la delimitación marítima en el Océano Antártico, y dado que la actual disputa solo giraba en torno a la compatibilidad o no de las actividades balleneras del Japón con sus obligaciones en virtud de la Convención, la objeción del Japón con respecto a la jurisdicción de la Corte no se sostenía.

Además, la Corte consideró que el Programa Japonés de Investigación de Ballenas en el Océano Antártico con un Permiso Especial se componía de actividades que en términos generales podrían caracterizarse de investigación científica, pero que “las pruebas no demuestran que la idea y la aplicación del programa son razonables en relación con la consecución de sus objetivos declarados”. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que los permisos especiales otorgados por el Japón para la matanza, la captura y el tratamiento de las ballenas en relación con el Programa de investigación de cetáceos del Japón en el Antártico con Permiso Especial no tenían fines de investigación científica, de conformidad con el párrafo 1 del artículo VIII de la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena.

En cuanto a las novedades en materia de procedimientos, es interesante señalar que, en virtud de una orden de 6 de febrero de 2013, la Corte autorizó a Nueva Zelandia a que interviniera en la causa relativa a la *Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. Japón)*. Por tanto, el 20 de noviembre de 2012, Nueva Zelandia presentó en la Secretaría una declaración de intervención en la causa. Para hacer uso de su derecho de intervención conferido en virtud del Artículo 63 del Estatuto de la Corte, Nueva Zelandia se basó en su condición de parte en la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena. Afirmó asimismo que,

como parte en la Convención, tenía interés directo en la interpretación que la Corte hiciera de la Convención en su decisión en esas actuaciones. Nueva Zelandia subrayó en su declaración que no pretendía ser parte en las actuaciones y confirmó que, al hacer uso de su derecho de intervenir, aceptaba que lo que se decidiera en el fallo de la causa sería igualmente vinculante para ella.

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de las opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que se remiten a la Corte Internacional de Justicia en la búsqueda de un arreglo pacífico de controversias, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Por tanto, es bastante desalentador que, durante el período que se examina, no se hayan formulado solicitudes de opiniones consultivas.

Sr. Norman (Canadá) (*habla en inglés*): En nombre del Canadá, Australia y Nueva Zelandia (Grupo CANZ), quisiera dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, el Magistrado Tomka, por su informe sobre la labor que ha realizado la Corte en el último año (A/69/4). Como países que creen firmemente en el estado de derecho, el Grupo CANZ siempre ha sido un firme defensor de la Corte Internacional de Justicia. La labor de la Corte, la calidad y la dedicación de sus magistrados nos merecen un enorme respeto.

Una vez más, la Corte ha tenido un volumen de trabajo sostenido, lo que demuestra su importancia primordial en la solución pacífica de las controversias. Las 13 causas que la Corte tiene actualmente ante sí provienen de todo el mundo y representan una diversidad de temas. El Grupo CANZ celebra la disposición de los Estados de recurrir a la Corte para el arreglo pacífico de sus controversias.

Nuestra confianza en la Corte se refleja en nuestra aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. El Grupo CANZ considera que una mayor aceptación de la jurisdicción obligatoria permitiría a la Corte cumplir su función de manera más eficaz reduciendo las cuestiones jurisdiccionales, permitiendo así a la Corte centrar más su atención en el fondo de las controversias. En consonancia con la resolución 68/116, alentamos a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte.

(*continúa en francés*)

El 6 de noviembre, los miembros de la Asamblea General y del Seguridad votarán para cubrir cinco plazas vacantes de magistrados de la Corte. Nuestros tres países apoyan sin reservas la candidatura del Sr. James

Crawford para una de las dos vacantes en el Grupo de Europa Occidental y otros Estados. Es un jurista internacional distinguido, que ha hecho una valiosa contribución a la Corte. Su candidatura figuró 27 veces en las listas de los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, lo cual es notable. También es señal evidente de la estima de goza en el ámbito jurídico internacional. Por ello, recomendamos a todos los Miembros de las Naciones Unidas que apoyen la candidatura del Sr. Crawford.

Esperamos que el programa de trabajo de la Corte en el próximo año siga siendo intenso, a medida que los Estados sigan reafirmando su confianza en la Corte. Por su parte, nuestros países abrigan la esperanza de que la Corte Internacional de Justicia siga desempeñando su importante función en el arreglo pacífico de las controversias internacionales.

Sr. Zellweger (Suiza) (*habla en francés*): En los últimos 20 años, la labor de la Corte Internacional de Justicia ha aumentado considerablemente. Cada vez más Estados reconocen los medios prácticos y eficaces que la Corte ofrece para el arreglo pacífico de las controversias. De hecho, gracias a su mandato único, su carácter universal, la autoridad y la finalidad de sus decisiones y su jurisdicción basada en el consenso, la Corte constituye el marco ideal para la solución pacífica de las controversias entre los Estados.

Para fortalecer ese impulso y alentar aún más a los Estados a reconocer la jurisdicción de la Corte, el 24 de septiembre de 2012, en el marco de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (A/67/PV.3 y siguientes), Suiza y los Países Bajos se comprometieron a elaborar, con la ayuda de la Secretaría, una guía práctica para poner de relieve los beneficios de la Corte y explicar las distintas opciones disponibles para reconocer su jurisdicción. Posteriormente, el Reino Unido, el Uruguay, Lituania, el Japón y Botswana se sumaron a ese proyecto. Una vez concluida la guía práctica, se envió esta semana a todas las misiones permanentes en Nueva York.

Los Estados tienen tres opciones para reconocer la jurisdicción de la Corte: en primer lugar, aceptar unilateralmente su jurisdicción; en segundo lugar, aceptar su jurisdicción en virtud de un tratado; o, en tercer lugar, remitir una controversia específica a la Corte en virtud de una avenencia. Esas tres opciones se explican en detalle en el folleto. Se ofrecen ejemplos concretos en forma de modelos de declaraciones, artículos y cláusulas

de avenencia, que los Estados podrán aprobar y adaptar según consideren convenientes. Se trata de una guía práctica. Está dirigida principalmente a los Estados, cuyos diplomáticos o miembros de delegaciones negocien tratados internacionales. Esperamos que ello ayude a eliminar algunos obstáculos técnicos que dificultan el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Esperamos que la guía permita realzar aún más la importancia de la Corte y su contribución a un orden internacional más justo y pacífico.

Sr. Pérez Pérez (Cuba): Sr. Presidente: Cuba se adhiere a la declaración formulada por la República Islámica del Irán en nombre del Movimiento de los Países no Alineados.

La República de Cuba agradece la presentación del valioso documento A/69/4, el informe de la Corte Internacional de Justicia. Además, deseamos expresar ante este plenario nuestro compromiso con la estricta aplicación del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias internacionales.

Mi delegación reconoce la labor de la Corte desde su surgimiento. Sus decisiones y opiniones consultivas han sido de especial trascendencia no solo para los casos sometidos a su consideración, sino también para el desarrollo del derecho internacional público. El volumen de casos puestos a consideración de este foro, muchos de los cuales corresponden a la región de América Latina y el Caribe, demuestra la importancia que le brinda la comunidad internacional a la solución pacífica de controversias. La República de Cuba pondera el arreglo pacífico de controversias de acuerdo con el párrafo 1 del Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y ha declarado la aceptación, previo consentimiento, de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.

Cuba lamenta la existencia de fallos de la Corte sin ejecución, en franca violación del Artículo 94 de la Carta, mediante el cual se establece que cada Miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en el que sea parte. Al respecto, la República de Cuba observa con preocupación que puedan ser sometidas a críticas, no sin razón, la efectividad y ejecutoriedad de las sentencias de la Corte, cuando algunos países desconocen aun sentencias que les son desfavorables. Lamentablemente, la negativa por parte de estos países de cumplir con las sentencias dictadas y la obstaculización que han hecho de los mecanismos con que cuentan las Naciones Unidas para hacer efectivas las sentencias, valiéndose del privilegio del derecho de veto en el Consejo

de Seguridad, demuestran la imperfección de los mecanismos de la Corte para ejecutar sus decisiones.

Lo anterior evidencia que la necesidad de reformar el sistema de las Naciones Unidas, a fin de otorgarles mayores garantías a los países en vías de desarrollo frente a las naciones poderosas, es también de aplicación en la sede de la Corte Internacional de Justicia. Mi delegación considera de utilidad la presentación de un balance crítico por parte de la Corte, en el cual se examine su relación con los órganos de las Naciones Unidas, en especial con el Consejo de Seguridad.

Muchos han sido los casos de relevancia tratados por la Corte Internacional de Justicia. Cuba concede gran importancia a la opinión consultiva unánime de la Corte Internacional de Justicia, emitida el 8 de julio de 1996 sobre la *Legalidad de la amenaza o el empleo de las armas nucleares*. En ésta, la Corte Internacional de Justicia llegó a la conclusión de que existe la obligación de emprender de buena fe y llevar a su conclusión las negociaciones con miras al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y eficaz. En ese sentido, y como ya ha expresado en este Salón, Cuba insta a que se respete plenamente la opinión consultiva de 9 de julio 2004, titulada *Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado* y hace un llamamiento a todos los Estados a respetar y garantizar el respeto de las disposiciones de la Corte en este importante asunto.

Cuba concede gran importancia a la asignación de los recursos presupuestarios necesarios para que la Corte Internacional de Justicia pueda realizar de manera adecuada su trabajo para lograr la solución por vía pacífica de los conflictos que tiene bajo su jurisdicción. Cuba hace un llamado a trabajar para lograr que estos recursos lleguen de manera oportuna y apropiada a la Corte.

La República de Cuba desea agradecer a la Corte por las publicaciones puestas a disposición de los Gobiernos partes y por los recursos en línea, que constituyen un valioso material para la difusión y el estudio del derecho internacional, fundamentalmente para los países en desarrollo, algunos de los cuales nos vemos en muchas ocasiones privados de la información relacionada con el avance del derecho internacional, debido a políticas de bloqueo obsoletas y absurdas, rechazadas de manera abrumadora por la comunidad internacional.

Cuba ha sido un país con vocación pacífica y respetuosa del derecho internacional, y siempre ha cumplido fielmente con sus obligaciones internacionales, derivadas de los tratados de los cuales es parte, y desea aprovechar

esta oportunidad para reiterar su compromiso con la paz. Los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años demuestran de manera fehaciente la importancia de la Corte Internacional de Justicia como órgano jurisdiccional internacional que dirime, de acuerdo con el derecho internacional, de manera pacífica y de buena fe, las controversias de mayor impacto para la comunidad internacional.

Sra. Miculescu (Rumania) (*habla en inglés*): Ante todo, quisiera dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, el Magistrado Tomka, por haber presentado el informe sobre la labor de la Corte (A/69/4), que ha proporcionado una visión útil sobre las actividades de la Corte durante el año judicial 2013-2014.

Los Estados que presentan sus controversias a la jurisdicción de la Corte esperan que el órgano judicial principal de las Naciones Unidas adopte una decisión tras evaluar de manera exhaustiva la legislación y los hechos pertinentes. Esas expectativas se cumplieron en los fallos emitidos por la Corte durante el período objeto de examen. Podemos decir que el alcance y el grado de complejidad de sus actividades han aumentado, y felicitamos a la Corte por su ingente labor. La lista actual de causas que la Corte tiene ante sí es testimonio de la gran confianza que los Estados han depositado en este órgano.

Mi país apoya firmemente a la Corte y se ha comprometido a dirimir todas las controversias de conformidad con el derecho internacional. En el pasado, Rumania participó activamente en la labor de la Corte. Un ejemplo conocido es la solicitud presentada respecto de la delimitación de los espacios marítimos entre Rumania y Ucrania en el Mar Negro en la causa relativa a la *Delimitación marítima en el Mar Negro (Rumania c. Ucrania)*. El 3 de febrero, se organizó en Bucarest una reunión que sirvió de marco para conmemorar los cinco años transcurridos desde que se emitió el fallo de esa causa, que contó con la presencia del Magistrado Keith junto con varias otras personalidades destacadas en el ámbito del derecho internacional.

Rumania tiene la intención de proseguir y reforzar su colaboración con la Corte. Al respecto, quisiera referirme brevemente a las actividades que se han llevado a cabo hasta ahora respecto de la posible aceptación por Rumania de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. En el informe, como sabe la Asamblea, la Corte tomó nota con reconocimiento de que la Asamblea General, en su resolución 68/116, pidió a los Estados que aún no habían formulado una declaración de reconocimiento de la competencia obligatoria de la

Corte, que consideraran la posibilidad de hacerlo. De hecho, Rumania está considerando sumarse a las filas de los países que ya han formulado esta declaración. Con ese fin, las autoridades rumanas han adoptado varias medidas en ese sentido.

Por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania, el año pasado se celebró un debate público en torno a la posibilidad de que Rumania aceptara la jurisdicción obligatoria de la Corte. Ese debate público demostró que había un respaldo general a la iniciativa entre las autoridades rumanas, los expertos en materia de derecho internacional y el público en general. Tras concluir el debate público, se sometió a la consideración de una de las cámaras de nuestro Parlamento nacional un proyecto de ley sobre la presentación de una declaración en la que se acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte, el cual en la actualidad se ha presentado a la otra cámara, es decir, el Senado. Por tanto, hay grandes probabilidades de que, cuando se presente el siguiente informe anual de la Corte Internacional de Justicia, Rumania ya sea uno de los Estados que han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, lo que es, naturalmente, una prueba más de nuestro firme apoyo a la Corte.

Para concluir, quisiera reiterar la firme convicción de Rumania de que el cumplimiento estricto de las normas del derecho internacional es un requisito para el debido funcionamiento de la sociedad internacional. Esa visión se refleja mejor en las palabras que expresó el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Rumania y ex Presidente de la Sociedad de Naciones, Sr. Nicolae Titulescu. Sus palabras están inscritas bajo su efigie en el Palacio de la Paz, en La Haya: “Solo la paz que surge del orden jurídico permite que el hombre cumpla su destino”.

Sr. Saeed (Sudán) (*habla en árabe*): El Sudán une su voz a las declaraciones formuladas por los representantes de la República Islámica del Irán y de Sudáfrica, en nombre del Movimiento de los Países No Alineados y del Grupo de los Estados de África, respectivamente.

Mi delegación toma nota del informe de la Corte Internacional de Justicia, que figura en el documento A/69/4. También quisiera dar las gracias al Presidente de la Corte, el Magistrado Peter Tomka, por su presentación del informe, que refleja las actividades y las deliberaciones que la Corte llevó a cabo en el año judicial 2013-2014. Mi delegación expresa su reconocimiento respecto del papel desempeñado por la Corte en el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que le asigna la responsabilidad de ser el principal órgano judicial de la Organización, que tiene a

su cargo el fortalecimiento del estado de derecho en el plano internacional por medio de sus fallos y opiniones consultivas, que también hacen una contribución vital a los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a las controversias.

El papel de la Corte Internacional de Justicia y sus numerosas actividades requieren que los Estados Miembros den un mayor apoyo político y garanticen fondos suficientes para que la Corte cumpla las tareas que se le han encomendado. El informe anual ofrece una buena oportunidad para que la Asamblea General reitere la importancia de la Corte y se amplíe el apoyo que recibe. El gran número de casos que se remiten al Tribunal revelan que existe una confianza cada vez mayor en la Corte y su capacidad para resolver controversias con independencia e integridad, así como para hacerlo de una manera aceptable para todas las partes en una controversia.

El Sudán exhorta a la Corte a aplicar medidas que fortalezcan sus capacidades y su eficacia para enfrentar un elevado y creciente número de casos y responsabilidades, sobre todo para que pueda concluir los procesos con rapidez y emitir fallos. Mi delegación también exhorta a los Estados Miembros que aún no han reconocido la competencia de la Corte, a considerar la posibilidad de hacerlo, y a tomar medidas que contribuyan a fortalecer el estado de derecho en el plano internacional, así como a ayudar a este órgano en el cumplimiento de las funciones que le corresponden de conformidad con la Carta.

El Consejo de Seguridad no ha solicitado opiniones consultivas de la Corte desde 1970. El Sudán insta al Consejo a aprovechar la experiencia de la Corte como principal órgano judicial de las Naciones Unidas y como fuente de opiniones consultivas en la interpretación del derecho internacional. Asimismo, insta a la Asamblea General y los organismos especializados a solicitar opiniones consultivas de la Corte, sobre todo en lo que respecta a la interpretación del derecho internacional en sus programas y actividades.

Para terminar, el Sudán reitera la importancia de la Corte y apoya su función.

Sr. De Vega (Filipinas) (*habla en inglés*): Para comenzar, agradecemos Presidente Peter Tomka y a su equipo de colaboradores en La Haya, su exhaustivo informe sobre la labor de la Corte Internacional de Justicia (A/69/4) en el último año.

Filipinas hace suya la declaración que formuló el representante de la República Islámica del Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados.

Desde su creación, hace 68 años, la Corte se venido desempeñando un papel vital en las relaciones internacionales. Como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte resuelve controversias que no pueden resolverse de otra manera en, o mediante, los órganos políticos de la Organización. En virtud del artículo 38 del Estatuto de la Corte, esos son los conflictos que dicho órgano puede resolver por medio de la aplicación de las fuentes del derecho internacional —los tratados, la costumbre internacional, los principios generales del derecho y, como fuentes complementarias, los fallos judiciales y las doctrinas de los juristas más competentes.

Hace dos años, las Naciones Unidas celebraron por primera vez un Encuentro de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho. Del Encuentro resultó una Declaración de consenso de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el estado de derecho en los planos nacional e internacional (resolución 67/1). En ese documento se reconoce que la comunidad internacional tiene las instituciones, los métodos y las relaciones de trabajo para hacer que el estado de derecho sea pertinente para la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo. Una de esas instituciones es precisamente la Corte Internacional de Justicia. En el párrafo 31 de la Declaración se reconoce la valiosa contribución de la Corte en la promoción del estado de derecho. Filipinas reitera su apoyo a la Declaración, y afirma que tenemos el deber de cumplir con las decisiones de la Corte en casos contenciosos.

En el Artículo 1, párrafo 1, del capítulo I de la Carta de las Naciones Unidas nos recuerda nuestro deber ineludible de,

“lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.”

Esa es, precisamente, la idea que subyace tras la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales de 1982 (resolución 37/10), cuyo trigésimo aniversario conmemoramos hace dos años. La Declaración de Manila fue negociada y aprobada por la Asamblea General durante la Guerra Fría, cuando los países no alineados trataban de consolidar su independencia política y económica. La Declaración de Manila sustentó sus aspiraciones mediante la articulación de las normas para la solución pacífica de las controversias tal como se indica en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas.

Comenzando con la causa del *Canal de Corfú* en 1947 y hasta la adopción de la Declaración de Manila en 1982, un lapso de 35 años, la Corte se ocupó de 49 causas contenciosas. Sin embargo, de 1982 hasta hoy, el número de causas atendidas por la Corte ha aumentado, y en un período de 32 años, que es comparativamente más breve, se ocupó de más de 80 causas contenciosas. En el período que se examina, la Corte ha aceptado siete nuevas causas, lo que ha elevado a 13 el número de causas pendientes en su lista o, realmente a 14, como nos acaba de informar el Presidente Tomka.

Las partes soberanas en esas causas proceden de todas partes del mundo, la mitad de ellas de América Latina. Ayer, en un encuentro organizado de manera conjunta por México y la Sociedad Americana de Derecho Internacional, nos enteramos de las razones por las que los países latinoamericanos tienen tanta confianza en los fallos internacionales, incluidos los fallos de la Corte. Así aprendimos que América Latina como grupo ha contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional. Ese es un ejemplo que en nuestra opinión debe seguir el resto del mundo.

Esa confianza cada vez mayor, sobre todo entre los países en desarrollo, en la capacidad, credibilidad e imparcialidad de la Corte para resolver las controversias, exclusivamente por medios pacíficos, no es ajena a las normas, valores y aspiraciones articulados en la Declaración de Manila. La más esencial de esas normas es el rechazo del uso o la amenaza del uso de la fuerza. Después de todo, la Declaración de Manila refleja el aumento de la confianza de la comunidad internacional en el estado de derecho como piedra angular no solo de la solución pacífica de las controversias, sino también del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Solo el respeto al estado de derecho en el plano internacional puede garantizar el orden y la estabilidad que deseamos y merecemos. Esa es la manera en que contribuimos al desarrollo progresivo del derecho internacional.

Con el paso de los años el mandato y la jurisdicción de la Corte se han ido definiendo mejor. La creación de la Corte Penal Internacional y de mecanismos de solución de controversias especializados como el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio no restan importancia a la Corte en el siglo XXI. Por el contrario, la estructura jurídica internacional contemporánea contribuye a fortalecer a la Corte como el único foro para la solución de controversias entre Estados en el vasto ámbito del derecho internacional general. De

hecho, la Corte sigue ocupándose de las controversias relativas al genocidio, a cuestiones territoriales y marítimas, a daños al medio ambiente y a la conservación de los recursos vivos.

Si hay algo que nos enseña la Carta de las Naciones Unidas, y con ella el Estatuto, la jurisprudencia y la experiencia de la Corte Internacional de Justicia, es que las naciones más pequeñas —si su causa es justa— no deben temer a las grandes potencias. Lo cierto es que, gracias a la labor de la Corte, el estado de derecho en las relaciones internacionales tiene la posibilidad de prevalecer. Por consiguiente, Filipinas reitera el llamamiento dirigido a los Estados Miembros, que aún no lo hayan hecho, a aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte.

Por último, también instamos al Consejo de Seguridad a considerar seriamente el Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas, y a hacer un mayor uso de la Corte como fuente de opiniones consultivas y de interpretación de las normas pertinentes del derecho internacional, en particular en los problemas más actuales y controvertidos que afectan la paz y la seguridad internacionales.

Sr. Diener Sala (México): La delegación de México desea expresar su profundo reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia por la ardua labor realizada este año y agradecer a su Presidente, el Magistrado Tomka, la presentación del informe de la Corte (A/69/4).

La importante e intensa actividad sostenida por la Corte durante el último año demuestra la confianza de la comunidad internacional en la misma como el principal órgano jurisdiccional internacional. La consolidación de la Corte se demuestra con su vocación universal, ya que las partes en las controversias representan a todos los grupos regionales y continentes; con el uso por los Estados de los distintos medios procedimentales previstos en el Estatuto; y con el respeto y la diversidad de temas sustantivos sobre los cuales versan las controversias.

Al respecto, mi delegación desea destacar que, de las 17 causas que se encontraban en la lista de casos que conoció la Corte durante el período comprendido en el informe, 8 conciernen a Estados de América Latina y el Caribe, uno de ellos resuelto por la Corte y el otro retirado por el Estado promoventes. Ello demuestra que el compromiso que esta región tiene para con el cumplimiento del derecho internacional y el principio de la solución pacífica de controversias internacionales es total.

Mi delegación desea resaltar el gran valor jurídico que tienen las sentencias de la Corte tanto para los Estados partes en la litis como para la comunidad

internacional en su conjunto, al ser la jurisprudencia una fuente auxiliar de primera importancia en determinar la validez y contenido de las normas. La Corte tiene un papel esencial en el desarrollo del derecho internacional, particularmente al encabezar el diálogo con otros órganos jurisdiccionales, lo cual deriva en un enriquecimiento del derecho internacional, contribuyendo a evitar su fragmentación.

Desde la perspectiva adjetiva, el trabajo de la Corte se ha vuelto más complejo, ya que los Estados de manera recurrente acuden a todas las alternativas procedimentales previstas en el Estatuto, como son la solicitud de medidas provisionales y la interpretación de las sentencias, cuya determinación por la Corte son de primera importancia para evitar el escalamiento o el surgimiento de nuevas controversias. Lo anterior ha sido claro tanto en la causa *Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua)* y la causa *Cuestiones relacionadas con la incautación y retención de ciertos documentos y datos (Timor-Leste c. Australia)*, así como en la causa sobre la *Solicitud de interpretación del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia)*.

Asimismo, y desde un punto de vista sustantivo, la Corte, en sus dos sentencias dictadas durante el período que abarca el presente informe, abordó temas relevantes, como el cumplimiento de las obligaciones convencionales respecto a la conservación de recursos vivos, en particular a la luz del principio de buena fe, como fue la causa relativa a la *Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. Japón)*, así como la causa relativa a la *Controversia marítima (Perú c. Chile)*, lo cual complementa la amplia jurisprudencia que se ha generado respecto al tema.

México desea reconocer a la Asamblea General su buena disposición para autorizar nuevas plazas y otras peticiones presupuestarias de la Corte y hace un llamado para que la Asamblea General siga dotando de herramientas a la Corte para su desempeño óptimo como el órgano judicial principal de la Organización, incluso para que cuente con los recursos suficientes para la celebración de su septuagésimo aniversario en el año 2016.

México desea expresar también su sincero reconocimiento al Secretario de la Corte, Sr. Philippe Couvreur, por el desempeño de alta categoría en la triple dimensión de sus funciones, es decir, en los ámbitos jurídico, diplomático y administrativo. También desea expresar su aprecio a la Fundación Carnegie por alojar a la Corte en el Palacio de la Paz en La Haya. De la misma manera, México reconoce la labor que a lo largo de la

historia han realizado jueces de nuestro país como parte de ese órgano.

Deseo finalizar mi intervención haciendo un llamado para que aquellos Estados que no lo hayan hecho acepten la jurisdicción obligatoria de la Corte conforme al Artículo 36, párrafo 2, del Estatuto, con lo cual se fortalecerá el estado de derecho en el ámbito internacional a fin de asegurar el acceso de todos los Estados a un mecanismo judicial consolidado de solución pacífica de controversias.

Sr. Plasai (Tailandia) (*habla en inglés*): Tengo el honor de formular esta declaración en nombre del Reino de Tailandia sobre este tema del programa. En primer lugar, deseo agradecer al Presidente Tomka la manera capaz en que ejerce la Presidencia y su exhaustivo informe (A/69/4) sobre las actividades de la Corte Internacional de Justicia durante este último año.

La Corte ha desempeñado un papel activo en el tratamiento de las controversias entre Estados sobre diversos temas. En el período que se examina, los temas han ido desde la interpretación de un fallo hasta una delimitación marítima, y desde la conservación de la vida silvestre hasta la integridad del medio ambiente. Con tal diversidad de causas, el informe refleja los notables esfuerzos que, de manera eficiente y expedita, ha realizado la Corte en la gestión de su lista de causas pendientes.

En el informe de este año se incluye una causa en la que Tailandia es parte, a saber, la relativa a la *Solicitud de interpretación del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia)* (*Camboya c. Tailandia*), “Phra Viharn” en tailandés. Esta causa representa lo que probablemente haya sido la primera vez en que Magistrados que ocupan el estrado interpretaron un fallo emitido en un proceso en el que ninguno de ellos tomó parte originalmente.

Sin embargo, una lectura del fallo interpretativo de 11 de noviembre 2013 muestra que la Corte dedicó tiempo y esfuerzos a revisar de manera cuidadosa y profunda los expedientes de los procedimientos originales. De hecho, en el párrafo 69 de la sentencia, la Corte subraya que los alegatos y el registro de los procedimientos orales en 1962 son “pertinentes para la interpretación de la sentencia, ya que demuestran qué pruebas tenía o no tenía ante sí la Corte, y cómo las cuestiones que tenía ante sí fueron presentadas por cada parte” (párr. 69 de la sentencia).

En general, me complace decir que la sentencia de 11 de noviembre de 2013 se basa en un razonamiento bien fundamentado y es coherente con la jurisprudencia

anterior de la Corte. Esa sentencia también otorga importancia a la necesidad de que ambos países celebren conversaciones. La sentencia ayuda a esclarecer varios aspectos del derecho que son esenciales y, en ese sentido, será una base más clara y útil para las consultas o negociaciones futuras que se celebren entre las dos partes, tanto para la cuestión sobre la que decidió la Corte en 1962, que según la Corte es la soberanía sobre una zona definida del territorio, como más allá de esa zona. La sentencia también ha contribuido de manera positiva a diversos aspectos de la jurisprudencia existente sobre la interpretación de fallos, algunos de los cuales me gustaría mencionar para que consten en actas.

En primer lugar, en la interpretación del fallo de 1962, la Corte reafirmó que el principio de *non ultra petita* debe respetarse en el contexto de la interpretación del fallo. En otras palabras, la Corte reafirmó que las cuestiones que el solicitante no le presentó de manera adecuada y que, por consiguiente, no fueron objeto de una decisión por la Corte en el procedimiento original, no pueden ser objeto de interpretación.

En segundo lugar, la Corte también reafirmó que en un procedimiento de interpretación se debe respetar el principio de *res judicata*, es decir, las cuestiones sobre las que no hubo una decisión vinculante en el procedimiento original no pueden ser objeto de interpretación. Por consiguiente, la Corte se ha mantenido estrictamente dentro de los límites del fallo original y se ha abstenido de tratar cuestiones sobre las que no adoptó ninguna decisión en 1962.

En tercer lugar, la Corte considera que el alcance de la cosa juzgada del fallo de 1962 corresponde al tema en cuestión del procedimiento original, a saber, y exclusivamente, la soberanía sobre el Templo de Preah Vihear y el promontorio sobre el que se encuentra, y a ninguna otra cuestión.

La causa relativa a la interpretación del *Templo* sigue siendo un tema importante en Tailandia. El nivel de sensibilización de la opinión pública acerca de la causa y la elevada demanda de información y explicaciones no tienen precedentes. Durante la vista oral y la lectura del fallo dictado el año pasado, la población tailandesa siguió con enorme interés, en tiempo real y por televisión en vivo la difusión a nivel nacional de las actuaciones de la Corte desde La Haya a Tailandia, con servicios de interpretación simultánea en lengua tailandesa. Nunca antes en la historia de Tailandia un acto oficial había generado semejante interés público. Huelga decir que en el proceso se puso de relieve el papel de la Corte

Internacional de Justicia como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que ahora se conoce y se comprende mejor en mi país. Abrigamos la esperanza de que el fallo contribuya a la buena vecindad entre Tailandia y Camboya, dos países que comparten un destino común como hermanos en la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.

Para concluir, quisiera expresar mi agradecimiento a los magistrados y a la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia por su eficiencia y profesionalidad, así como por su contribución a la justicia internacional. Ha sido un honor y un privilegio para mí actuar como agente del Reino de Tailandia en esta causa.

Sr. Alabrune (Francia) (*habla en francés*): Quisiera dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia por su presentación sumamente instructiva del informe sobre la actividad de la Corte en el año que acaba de transcurrir (A/69/4).

Como se señala en la lista de las causas inscritas en la función de la Corte, su actividad contenciosa ha aumentado notablemente en los últimos 20 años, lo cual es testimonio tanto de la confianza de los Estados en su jurisdicción como del papel que desempeña, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, en su afán por solucionar las controversias por medios pacíficos y fortalecer el estado de derecho.

En ese sentido, si los fallos y las decisiones emitidas por la Corte se imponen a las partes debido a la autoridad de la cosa juzgada, su respeto y su cumplimiento por los Estados también son una función de la calidad de las decisiones de la Corte. En consecuencia, los fallos y las decisiones de la Corte pueden contribuir a aliviar tensiones políticas y ayudar a los Estados a que encuentren soluciones que otros medios pacíficos de resolver las controversias no ofrecen. El fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia el 11 de noviembre de 2013 en la causa relativa a la solicitud de interpretación del fallo de 15 de junio de 1962 en la causa relativa al *Templo de Preah Vihear (Camboya c. Tailandia) (Camboya c. Tailandia)* es un ejemplo de ello. La decisión debería contribuir a resolver el problema creado por la controversia territorial entre Camboya y Tailandia, y permitir dar con una solución a la cuestión de la delimitación de su frontera común en esa zona.

Las controversias fronterizas son una parte importante de la labor de la Corte y, durante el último decenio, las controversias marítimas se han vuelto cada vez más importantes en esa categoría. Un ejemplo de ello es la causa *Controversia marítima (Perú c. Chile)*, en la que

la Corte dictó su fallo el 27 de enero de 2014, pero pueden mencionarse también otras causas, aún pendientes: la causa relativa a la *Delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico (Costa Rica c. Nicaragua)*; la causa relativa a las *Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)*, la otra causa relativa a la *Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas contadas desde la costa de Nicaragua (Nicaragua c. Colombia)* y la causa recientemente incoada por Somalia contra Kenya relativa a la *Delimitación marítima en el Océano Índico (Somalia c. Kenya)*.

Además, este año nos permitió una vez más apreciar la diversidad de ámbitos de los que la Corte termina ocupándose. Entre las controversias inscritas en la lista de la Corte, cuatro se refieren a aspectos relativos a la obligación de negociar, a saber, las tres solicitudes de las Islas Marshall para los procedimientos que tienen que ver con las negociaciones para poner fin a la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear y la causa de Bolivia contra Chile relativa a la *Obligación de negociar el acceso al Océano Pacífico (Bolivia c. Chile)*. La obligación de negociar se presenta, por lo tanto, como una de las piedras angulares del derecho internacional público, que abarcan las diversas ramas del derecho.

Este año también se caracterizó por una serie de solicitudes de incoación de procedimientos basados en el párrafo 5 del artículo 38 del Reglamento de la Corte, conocido como *forum propagandum*. Este año, en consonancia con una tendencia fundamental, los Estados, de nuevo, aprovecharon particularmente al máximo la posibilidad de pedir intervenciones en los procedimientos, y la Corte ha dictado 13 providencias, frente a tres fallos. Si bien ello ha permitido a la Corte esclarecer las condiciones de su función judicial, también ha contribuido a prolongar el proceso y a incrementar el volumen de trabajo de la Corte.

En general, el recurso extraordinario de la Corte Internacional de Justicia atestigua la calidad de las razones que fundamentan sus fallos y el equilibrio de las soluciones que de ello resultan.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para, en nombre de Francia, expresar una vez más a la Corte nuestra gratitud por su labor, que este año, como en el pasado, sigue reflejando su actuación sostenida y eficaz.

Sra. Chadha (India) (*habla en inglés*): Quisiera sumarme a otras delegaciones para dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Magistrado

Tomka, por habernos presentado el informe exhaustivo sobre las actividades judiciales de la Corte durante el año transcurrido (A/69/4)

La Corte, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, tiene encomendada la tarea de resolver pacíficamente las controversias entre los Estados, lo cual es importante para que se cumpla uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Desde su creación, la Corte ha llevado a cabo esa tarea de manera admirable, y ha adquirido una merecida reputación como institución imparcial que mantiene las más elevadas normas jurídicas de conformidad con su mandato en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de la que el Estatuto de la Corte forma parte integrante.

Como se establece en el Preámbulo de la Carta, uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas es crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia, como único tribunal internacional con competencia en el derecho internacional general, está en una situación privilegiada para cumplir esa función.

En el informe de la Corte se pone de manifiesto la importancia de que los Estados se adhiera a la Corte y la confianza que depositan ese órgano, como lo demuestran claramente el número, el carácter y la variedad de causas de que se ocupa la Corte, así como la capacidad de la Corte para abordar aspectos complejos del derecho internacional público.

Las causas que la Corte tiene ante sí se refieren a una amplia variedad de temas, como las controversias territoriales y marítimas, los daños causados al medio ambiente y la conservación de los recursos vivos, las violaciones de la integridad territorial, las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, el genocidio, la interpretación y la aplicación de las convenciones y los tratados internacionales, y la interpretación de los fallos de la Corte.

Los fallos de la Corte han desempeñado un papel importante a la hora de interpretar y aclarar las normas del derecho internacional, así como para el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. En el desempeño de sus funciones judiciales, la Corte actúa con sensibilidad ante las realidades políticas y los sentimientos de los Estados, al tiempo que actúa en estricto cumplimiento de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, su propio Estatuto y las demás normas aplicables del derecho internacional.

La aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte constituye un medio para asegurar y promover la solución pacífica de controversias. Su fundamento radica en la confianza expresada por los Estados en el estado de derecho en el plano internacional. Los Estados que han depositado su confianza en el sistema con arreglo al Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto lo han hecho hasta ahora con relación a las controversias jurídicas que podrían surgir entre las partes *inter se*. Esto se confirma en el Artículo 59 del Estatuto, en el que se establece claramente que la decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Por tanto, la presentación de causas con miras a lograr objetivos universales en total desacato de esta premisa básica plantea problemas muy graves para países como la India, que han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte.

En cuanto a la lista de la Corte, constatamos que durante el año judicial 2013/2014, la Corte pronunció tres fallos, celebró audiencias públicas en cuatro causas y emitió 13 órdenes. La Corte, durante este período, entendió de siete nuevos casos contenciosos. El número total de casos contenciosos que la Corte tiene actualmente ante sí, como aclaró el Presidente Tomka, asciende a 14.

La segunda función de la Corte, a saber, emitir opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas planteadas por los órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, se suma a su importante función de aclarar cuestiones jurídicas internacionales clave. En el párrafo 17 del informe de la Corte se señala con acierto que “la actividad de la Corte en su conjunto está encaminada a promover el estado de derecho”, en particular con sus fallos y opiniones consultivas.

Valoramos los esfuerzos que despliega la Corte para garantizar la mayor concienciación mundial de sus decisiones mediante sus publicaciones, sus presentaciones multimedia y su sitio web, que ahora contiene la totalidad de su jurisprudencia de la Corte, así como la de su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional.

Nos complace señalar que la Corte prevé celebrar su septuagésimo aniversario en abril de 2016 y organiza una serie de actividades con miras a esa ocasión.

Por último, la India desea reafirmar su apoyo a la Corte y reconoce la importancia de la comunidad internacional atribuye a la labor de la Corte para promover la justicia internacional.

Sr. Meza-Cuadra (Perú): El Perú recibe con agrado el informe anual de la Corte Internacional de Justicia

a la Asamblea General, el mismo que da cuenta de su labor realizada entre el 1 de agosto de 2013 y el 31 de julio de 2014 (A/69/4).

Mi delegación desea iniciar esta intervención resaltando la función fundamental que desempeña la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial principal de las Naciones Unidas, en el sistema de solución pacífica de controversias establecido en la Carta. Ello constituye una contribución esencial a la promoción del estado de derecho en el plano internacional.

El Perú desea también recordar que además de la valiosa labor que cumple la Corte en la solución pacífica de controversias interestatales, ella puede emitir, de conformidad con el Artículo 96 de la Carta, opiniones consultivas a solicitud de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros órganos autorizados de las Naciones Unidas y los organismos especializados. Se trata pues de dos ámbitos de competencia de la Corte, la competencia contenciosa y la competencia consultiva, que mediante fallos y opiniones contribuyen a promover y aclarar el derecho internacional, como una verdadera opción de paz.

Por todo lo anterior, el Perú ve con agrado que la Asamblea General haya exhortado a los Estados que aún no lo hubieran hecho a que consideren la posibilidad de reconocer la competencia de la Corte, de conformidad con el Artículo 36, párrafo 2 de su Estatuto.

Dicho lo anterior, el Perú desea también reconocer la labor que cumplen los eminentes jueces que integran la Corte, en particular el Presidente y el Vicepresidente, así como los magistrados *ad hoc*; y en ese sentido, el Perú saluda la próxima renovación trienal de la Corte mediante las elecciones a realizarse el 6 de noviembre. De la misma manera, deseamos dejar constancia de nuestro reconocimiento a la intensa labor que cumple la Secretaría de la Corte, en particular el Secretario y el Secretario Adjunto.

El sostenido nivel de actividad de la Corte Internacional de Justicia es la expresión del prestigio de que goza el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Ello se explica, entre otras razones, por el importante número de medidas adoptadas en los últimos años para mejorar su eficiencia y permitirle absorber el aumento constante del volumen de trabajo, incluida una tramitación más rápida del creciente número de procedimientos incidentales, tal como se señala en los párrafos 9 y 10 del informe.

Asimismo, el Perú se complace en constatar que para el bienio 2014-2015 se accedió en gran medida a

las solicitudes de puestos nuevos y demás propuestas de gastos formuladas por la Corte. En tal sentido, mi delegación espera que se mantenga el mismo espíritu para el bienio 2016-2017, en que se celebra el septuagésimo aniversario de la Corte.

Finalmente, tal como fuera manifestado en la apertura del presente período de sesiones por el Presidente de la República del Perú, Sr. Ollanta Humala Tasso, mi delegación desea destacar la solución de la controversia de delimitación marítima con Chile, mediante el fallo de la Corte Internacional de Justicia pronunciado el 27 de enero de 2014, que ha sido explicado por el Presidente de la Corte al inicio de su intervención. De igual manera, destacamos también que la ejecución de lo dispuesto en el fallo de la Corte Internacional de Justicia ha sido la más rápida en la historia de la Corte, habiendo las partes precisado de manera conjunta las coordenadas geográficas del límite marítimo, de conformidad con dicho fallo, dentro de los dos meses del pronunciamiento. Por ello, el Presidente del Perú ha señalado: “En general, la forma en que se condujo todo el proceso constituye un ejemplo del Perú y de Chile para el mundo.” (A/69/PV.9, pág. 29).

Sr. Yoshikawa (Japón) (*habla en inglés*): Ante todo, quisiera dar las gracias al Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Peter Tomka, por su liderazgo y por su amplio informe (A/69/4) sobre la labor de la Corte.

Como hizo hincapié el Primer Ministro del Japón, Sr. Shinzo Abe, en esta tribuna dos años consecutivos, el estado de derecho es uno de los aspectos más importantes de la política exterior del Japón. El Japón concede especial importancia a las actividades de la Corte, el principal órgano judicial consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Valoro el papel que ha desempeñado para mejorar el estado de derecho en la comunidad internacional.

El derecho internacional ofrece a las partes interesadas un lenguaje común. Escuchamos cada vez más expectativas en todo el mundo de que el derecho internacional sirva de dispositivo para mitigar las tensiones que provocan las controversias acaloradas. Las causas que se remiten a la Corte abarcan una amplia variedad de temas, entre otros las controversias territoriales y marítimas, los conflictos económicos y ambientales y las violaciones relativas al derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. A pesar de que la Corte ha examinado causas cada vez más complejas desde el punto de vista fáctico y jurídico, cabe reconocer que sigue realizando una labor de elevada calidad.

El Japón cree firmemente que cada vez más países interesados deben reconocer la importancia del derecho internacional y utilizar la Corte Internacional de Justicia de manera apropiada. Por ejemplo, la aceptación universal de la jurisdicción de la Corte de conformidad con el Artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte mejoraría la función de la Corte. Ya en 1958, el Japón aceptó unilateralmente la jurisdicción obligatoria de la Corte. La situación relativa a la aceptación de la jurisdicción de la Corte es, sin embargo, muy deficiente. Solo 70 de todos los Miembros de las Naciones Unidas han aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Analizando el Grupo de Asia y el Pacífico, al cual pertenece el Japón, solo 7 de 54 países han aceptado esta jurisdicción. Espero que más países lo hagan, en particular los miembros del Grupo de Asia y el Pacífico.

En ese contexto, el Japón valora sobremanera la reciente publicación del *Manual sobre la aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia*, del cual tengo aquí un ejemplar. Permítaseme expresar especial agradecimiento a Suiza por su liderazgo para elaborar el Manual. Hago extensiva mi gratitud a los demás patrocinadores, a saber, los Países Bajos, el Uruguay, el Reino Unido, Lituania y Botswana. El Japón se enorgullece de ser uno de los siete países que elaboraron el Manual.

Asimismo, quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a la experiencia del Japón en cuanto al arreglo pacífico de controversias en la Corte Internacional de Justicia. Fue un año importante para el Japón, ya que la Corte emitió su fallo en relación con la causa relativa a la *Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. Japón)*. Durante las actuaciones ante la Corte, el Japón aclaró su posición respecto de las cuestiones que intervienen en esta causa, respetando plenamente las actuaciones. Fue decepcionante la decisión de que el programa de investigación del Japón sobre la caza de la ballena no estaba comprendido en el ámbito del artículo pertinente de la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. Sin embargo, el Japón se atiene al fallo de la Corte. El Japón continuará su política respecto del uso sostenible de los recursos marinos vivos de conformidad con el derecho internacional y sobre la base de pruebas científicas, teniendo en cuenta el razonamiento y las conclusiones que figuran en el fallo.

Por último, deseo reiterar el apoyo inquebrantable del Japón a la Corte Internacional de Justicia.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.